

# Dinámica

reciente de la confrontación  
armada en Caldas

República de Colombia



Libertad y Orden



Observatorio del  
Programa Presidencial  
de Derechos Humanos  
y DIH



# Índice

Introducción	5
Grupos armados irregulares	7
Regionalización	11
Oriente	13
Norte	27
Occidente	32
Centro Sur	44
Conclusión	51
Anexo	55



Zona rural Samana, Caldas



A pesar de que las anteriores circunstancias aquejen a la totalidad del departamento, las dinámicas y las expresiones de la violencia difieren en las distintas regiones, principalmente por la marcada desarticulación del departamento. En este sentido, se comunica de norte a sur, siguiendo el curso de los ríos Cauca y Magdalena y su dinámica está más vinculada con los departamentos vecinos que con su mismo territorio. Adicionalmente, las carreteras de oriente a occidente son precarias, situación que ha determinado que las regiones estén desvinculadas unas de otras. Debido a lo anterior, para el estudio presente, se decidió dividir el departamento en cuatro regiones para llevar a cabo el análisis: *Oriente, Norte, Centro sur y Occidente*, analizando cómo se manifiestan las diferentes dinámicas de la violencia y cómo han evolucionado los indicadores de los municipios más representativos de cada una de ellas.

En el conjunto del texto, se utilizan indicadores sobre varios aspectos. Los tres principales están relacionados con la intensidad de la confrontación armada, las tasas de homicidio y los secuestros. Adicionalmente, dependiendo de la región, se consideran las minas antipersonal y los desplazamientos de población. El eje de la presentación son los protagonistas armados, alrededor de los cuáles se desarrollan estos temas.

El informe comprende cuatro partes. En la primera, se presentan las generalidades sobre la presencia de los actores armados irregulares, sin entrar en detalles. En la segunda, se determinan las regiones y se precisan las características de cada una de ellas. En la tercera, se desarrolla el análisis sobre los indicadores en cada una de las zonas establecidas y por último se realiza una sinopsis del estudio.

# Grupos armados irregulares

**A**ntes de los años noventa, en el occidente de Caldas tuvieron expresión el EPL y el M-19 hacia la frontera con Risaralda, las Autodefensas del Magdalena Medio se ubicaron principalmente en el oriente y el ELN se había insinuado tímidamente a partir del núcleo urbano Marta Elena Barón en Manizales y otros centros urbanos como Chinchiná, en el sur, hacia 1988, demostrando un bajo protagonismo armado. Las Farc y el ELN sólo se expandieron significativamente en los años noventa, coincidiendo en lo esencial con la ruptura del pacto cafetero o acuerdo mundial cafetero<sup>1</sup>.

No obstante, se debe resaltar que la dinámica de los grupos armados irregulares en el departamento guarda una estrecha relación con los departamentos vecinos o cercanos, principalmente Antioquia, Risaralda, Chocó, Tolima y Valle del Cauca. En lo que se refiere al frente 47 de las Farc, el más importante en la actualidad, se debe señalar que se conformó en el Oriente antioqueño, desde esta región se desplazó y se asentó en el Oriente caldense, en las estribaciones del flanco derecho de la cordillera oriental, principalmente en Samaná, desde donde se moviliza hacia el norte, utilizando el corredor Aguadas, Pácora y Salamina; el frente 9 de este mismo grupo, con una presencia marginal, también proviene del Oriente antioqueño y se moviliza en el oriente y en el norte del departamento. A su turno, el frente Aurelio Rodríguez se desenvuelve en el occidente, en límites con Risaralda.

Por otro lado, el frente Cacique Calarcá del ELN, que se desplaza entre Risaralda y Caldas, surgió aproximadamente en 1992 y desde ese entonces se fue expandiendo lentamente en el centro y suroccidente. Posteriormente, aparece también el frente Ernesto Che Guevara como una prolongación de su accionar en el suroeste antioqueño y el Chocó, al tiempo que el Carlos Alirio Buitrago, con asiento en el Oriente antioqueño, se desplaza constantemente hacia el departamento estudiado. Por otra parte, la disidencia del EPL en Caldas surgió a finales de los ochenta y después de la desmovilización de esta agrupación en 1990, surgió una estructura al mando de *Francisco Caraballo*, el frente Oscar William Calvo, con asiento en Riosucio y Anserma, en el occidente del departamento, municipios que rodean el municipio de Quinchía en Risaralda. En la actualidad, el ELN está muy debilitado, la acción del EPL se circunscribe a los municipios del occidente anteriormente precisados y las Farc es la agrupación que más movilidad y actividad armada tiene en el nororiente y el norte, principalmente.

Las Autodefensas del Magdalena Medio (ACMM) tienen amplia tradición en Caldas y nacieron en La Dorada, Victoria y Norcasia, muy asociadas a la dinámica que se desarrollaba en

---

<sup>1</sup> Mariela Márquez, "Caldas y Café, la leyenda apenas comienza", Manizales, 2005. Entre la segunda mitad de los sesenta y la primera mitad de los setenta se insinuaron destacamentos de las Farc en el Eje Cafetero, bajo el mando de Ciro Trujillo, pero éstos fueron golpeados por el Ejército Nacional y no prosperaron. De especial utilidad es el libro de Arturo Alape titulado *Los Sueños y La Montañas*. Bogotá, Planeta 1994. Ver el capítulo titulado "Fundación de las Farc", págs. 67 a 84.



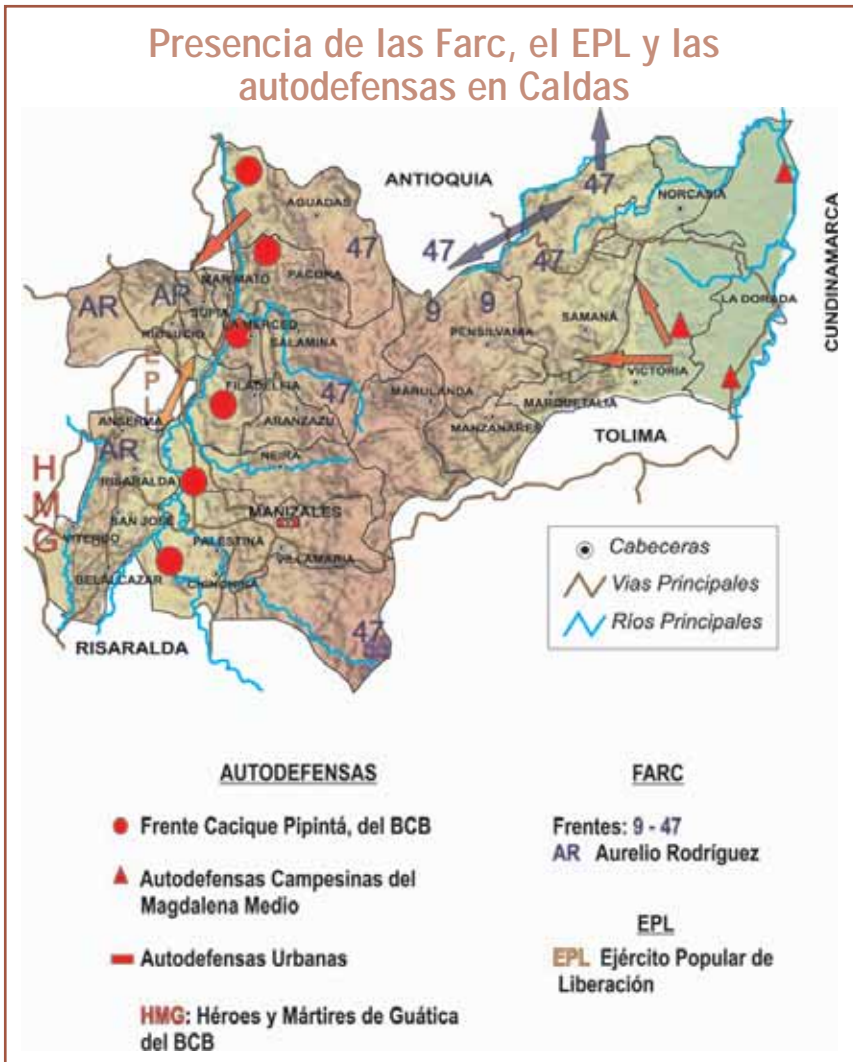
Rio Cauca, Caldas

la región del Magdalena Medio, en la confluencia entre Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander. En un principio, en los ochenta, actuaba la agrupación *Muerte a Secuestradores, Mas*, muy relacionada con el narcotráfico y en los años noventa surgieron propiamente como Autodefensas del Magdalena Medio al mando de *Ramón Isaza*. Es tan sólo en los años 2000, cuando esta estructura decide expandirse hacia las estribaciones de la cordillera central, donde el frente 47 de las Farc experimentaba una importante expansión. El 7 de febrero de 2006, se desmovilizaron 990 hombres de esta agrupación en Puerto Triunfo, Antioquia.

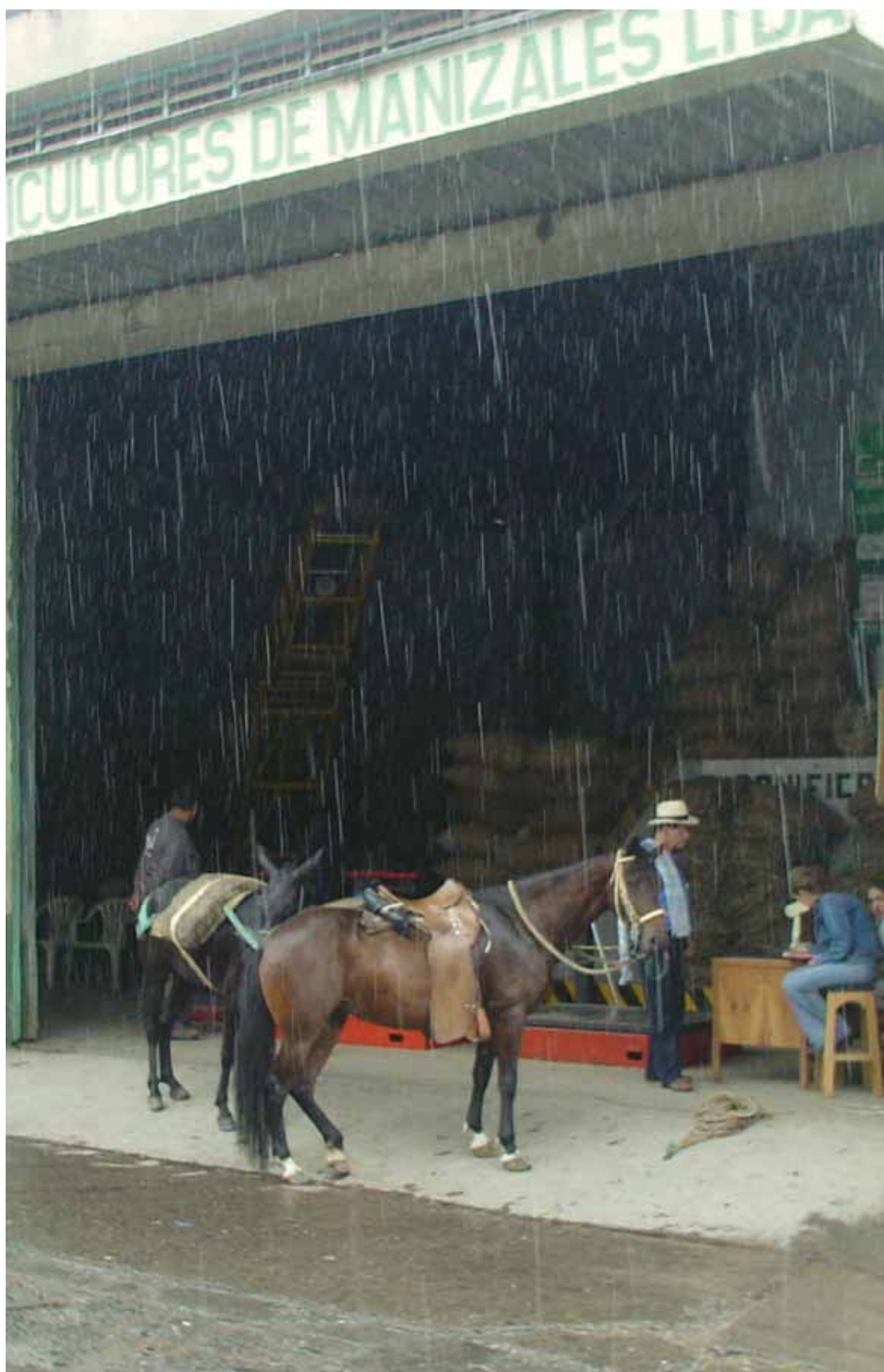
En Caldas, también tiene incidencia el frente Cacique Pipintá del bloque Central Bolívar, agrupación cuya naturaleza está muy asociada al narcotráfico, que sin embargo ha tratado de incidir en la política regional y local, particularmente en el norte del departamento, especialmente en Aguadas. Si bien han existido manifestaciones en cuanto a presencia de autodefensas desde la segunda mitad de la década de los noventa, asociadas en un principio a las AUC y a Carlos Castaño, desde finales de los noventa, Ernesto Báez adquiere influencia en el norte del



departamento y en los años 2000, la organización adquiere identidad propia como frente Cacique Pipintá, adscrito al bloque Central Bolívar. Su influencia se extiende a lo largo del cañón del río Cauca, un antiguo corredor del narcotráfico, estratégico porque se establecen conexiones entre Antioquia, el Eje Cafetero y el norte del Valle. Su radio de acción ha involucrado el *Norte*, parte del *Occidente* y del *Centro sur*, incluida la capital, Manizales.



Fuente base cartográfica: IGAC  
 Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la República



Cooperativa de Caficultores. Manizales, Caldas

# Regionalización

Para el presente documento, se definieron cuatro regiones, tal como lo hace la Corporación Autónoma de Caldas, Corpocaldas. Éstas son *Oriente*, asociada al río Magdalena y al flanco oriental de la cordillera central. *Norte y Centro Sur*, más relacionadas con el flanco occidental de la cordillera central y el río Cauca. Finalmente, el *Occidente* tiene la mayor parte de su territorio en el flanco oriental de la cordillera occidental.



Fuente cartografía básica: IGAC  
Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República

El *Oriente* caldense está conformado por los municipios de La Dorada, Victoria, Norcasia, Samaná, Marquetalia, Manzanares, Pensilvania y Marulanda. En el extremo oriental, se ubica el valle del río Magdalena, que baña La Dorada y una parte de Norcasia y Victoria. Estos municipios tienen la mayor parte de su territorio en la zona plana, por lo que sus propiedades son de tamaño mediano y grande y tienen un alto componente de ganadería y extensas explotaciones agropecuarias. La zona de altitud media, entre 1.200 y 1600 metros, que conforma un cinturón cafetero, está integrada por Samaná, Marquetalia, y una pequeña porción de Victoria, Norcasia, Manzanares, Pensilvania y Marulanda. La zona más alta, donde el café desaparece y las condiciones del medio natural no favorecen el poblamiento, puesto que corresponde a

tierra fría y páramos, se orienta a ganadería de leche y existen amplias zonas de bosque natural; esta área cubre a Marulanda y una porción importante de Manzanares y Pensilvania.

El *Norte* está conformado por Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, La Merced y Filadelfia. Están ubicados en la franja occidental de la cordillera central y por ende están más asociados al río Cauca. Entre más se acercan al valle, más cafeteros y entre más altitud, al igual que el *Oriente*, se caracterizan por tener ganadería de leche y bosque natural. En este orden de ideas, Aguadas, Pácora, Salamina y Aranzazu tienen una franja cafetera, otra montañosa y otra plana. La Merced y Filadelfia, por el contrario, sólo tienen una parte cafetera y el resto es plano. Es una región muy influenciada por Antioquia, donde el narcotráfico ha impactado en forma importante, pues hace parte del corredor del río Cauca que comunica al Eje Cafetero con Valle y Antioquia.

El *Centro Sur* está integrado por Neira, Manizales, Palestina, Chinchiná y Villamaría. Tienen territorio en el valle del río Cauca y/o sobre el flanco occidental de la cordillera central. Todos albergan área cafetera, pues tienen territorio en las vertientes medias cordilleranas, donde los suelos derivados de cenizas volcánicas y las condiciones climáticas favorecen su desarrollo; existe un predominio de la pequeña propiedad con explotaciones tecnificadas y de altos rendimientos<sup>2</sup>. Manizales, Chinchiná y Palestina concentran el 40% de la producción del departamento<sup>3</sup>. Villamaría es el de mayor extensión y en términos relativos el de menor área cafetera y mayor proporción con área en cordillera; dispone de explotaciones de cebolla.

El *Occidente* de Caldas está dividido por el departamento de Risaralda en dos subregiones denominadas *Alto* y el *Bajo Occidente*. La parte *Alta* se ubica hacia el norte de Quinchía, municipio del vecino departamento, y está conformada por Marmato, Riosucio y Supía. Éstos se encuentran en la margen izquierda del río Cauca y cuentan con un importante espacio en el flanco derecho de la cordillera occidental. La parte sur o el *Bajo Occidente* está conformada por Belalcázar, San José, Viterbo, Anserma y Risaralda. Todos tienen área cafetera, pero Riosucio, de gran extensión, tiene una gran cantidad de su territorio en la cordillera. Este municipio cuenta con una importante porción de la población con ascendencia indígena, de la etnia Chami; igualmente, existen viejos asentamientos en Supía. Se encuentra población afrocolombiana en Supía y Marmato, que llegó alrededor de explotaciones mineras de oro y plata desde el siglo XVI<sup>4</sup>. Marmato, Supía y Riosucio están asociados a la dinámica del suroriente antioqueño, al tiempo que Riosucio limita con el Chocó y Risaralda, donde también está ubicada población indígena. Existen explotaciones ganaderas en Filadelfia, pues tiene tierras planas en el valle del río Cauca, y en menor proporción en La Merced, Supía y Marmato. El *Bajo Occidente* está rodeado por Risaralda, todos sus municipios son cafeteros, siendo Viterbo el que dispone de tierras más planas y calientes.

2 Características Geográficas. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá, Imprenta del IGAC, 1989, pág. 87.

3 Datos suministrados por Alfonso Angel, Director de la Federación de Cafeteros de Caldas, entrevistado el 19 de mayo de 2006.

4 Miguel Orozco Ramírez. Caldas: Ancestros y Peculiaridades de su Desarrollo Histórico, Político y Social. Violencia Racional y Regional. Manizales, Fondo Editorial Gobernación de Caldas. Instituto Caldense de Cultura, Crear Imagen, 2001 Pgs.18 y 19

## Oriente

En esta región, es importante diferenciar tres dinámicas. La primera es la que se produce en el valle del Magdalena, en las regiones más planas; la segunda se desenvuelve principalmente en el cinturón cafetero y la tercera en las partes más altas de la cordillera. En la zona plana, principalmente en La Dorada, las autodefensas y el narcotráfico tienen una influencia histórica, mientras que en el cinturón cafetero y en las partes más altas, las Farc han logrado una mayor presencia. Sin embargo, como efecto de la incursión de las autodefensas, su peso en la actualidad es mayor en el nororiente. Esta guerrilla ingresó a la región por la cordillera en la década de los noventa, mientras que las autodefensas, desde 2000, incursionaron en las zonas de altitud media y alta; por ello, las disputas entre las agrupaciones armadas irregulares aumentaron significativamente en esta parte del departamento en los últimos cinco años, principalmente en Samaná y Pensilvania.



Fuente: Boletines diarios del Das, Policía Nacional y Fondelibertad  
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la República  
 Eje izquierdo: tasas de homicidio  
 Eje derecho: secuestro e intensidad de la confrontación

Veamos primero el caso de La Dorada, donde se ilustrará lo ocurrido con las autodefensas, acudiendo para ello a los indicadores de homicidio. En segundo término, se examinará la situación en Samaná, Victoria y Norcasia, donde las Farc tenían una influencia determinante, pero incursionaron las autodefensas a disputarle su protagonismo, disputa no resuelta a favor de uno o otro al momento de la desmovilización de las autodefensas en 2006. Se utilizará para ello los indicadores de la intensidad de la confrontación armada, los homicidios, el uso de minas antipersonal, los secuestros y los desplazamientos forzados de población.

## El Valle del Magdalena: La Dorada

Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio aparecieron como tal en los años noventa, principalmente en La Dorada; sin embargo las autodefensas tenían una amplia tradición, pues en los años ochenta se había expandido el *Mas* en la confluencia entre Antioquia, Caldas, Boyacá y Cundinamarca, en inmediaciones del valle del Magdalena<sup>5</sup>. El narcotráfico se convirtió en un factor dinamizador en este aspecto, en particular en La Dorada, donde varios narcotraficantes se asentaron y compraron tierras. Es por ello que a principios de los noventa, se produjeron varios eventos asociados a contradicciones en el interior del narcotráfico o por disputas entre autodefensas<sup>6</sup>: el atentado en 1991 a la edificación de la Hacienda El Japón, que había comprado Jairo Correa Alzate, asociado a ajustes de cuentas entre narcotraficantes; en 1991, fueron dados de baja ocho integrantes de estructuras del narcotráfico y de las autodefensas, entre ellos Jaime Eduardo Rueda Rocha, implicado en el asesinato de Luis Carlos Galán y en el atentado a las instalaciones de El Espectador en Bogotá.



Fuente: Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República

5 La dinámica de las autodefensas del Magdalena Medio en la confluencia entre Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander es muy compleja a principios de 1990, pues estuvo atravesada por divisiones a raíz de la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha. Así mismo, el Estado emprende una persecución contra estas diferentes facciones, tras el asesinato de Luis Carlos Galán, en agosto de 1989.

6 En 1989 ya habían ocurrido un atentado contra las instalaciones de Drogas La Rebaja, que ilustra las contradicciones entre los carteles de Medellín y de Cali: una incursión en Victoria contra una finca de familiares de Germán Montoya en 1989, entonces Secretario general de la Presidencia, como represalia del narcotráfico, por la persecución que emprendió contra sus integrantes la administración Barco a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán.

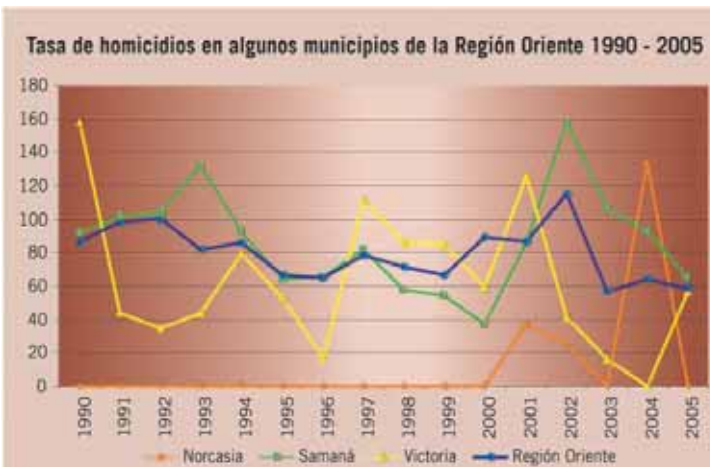
Las tasas de homicidio en el municipio de La Dorada ayudan a visualizar parte de lo descrito. Su comportamiento fue muy elevado entre 1990 y 1994, síntoma de la presencia de las autodefensas, que tenían fuerza desde los años ochenta, así como del narcotráfico. No son pocos los incidentes que se producen en el marco de *vendettas* en el interior del narcotráfico y por problemas entre agrupaciones de autodefensas. Entre 1995 y 1999, la tendencia se orienta al descenso, no obstante su nivel sigue siendo importante, pues las tasas oscilan entre 60 y 80 homicidios por cien mil habitantes -hpch-. Al respecto, se debe tener en cuenta que el casco urbano de este municipio creció mucho en esos años, como consecuencia de migraciones del entorno, no sólo del departamento de Caldas, sino también de Boyacá, Santander y Antioquia, amparadas por

las ofertas de vivienda y de servicios por parte de políticos locales, así como resultado de la violencia en el Magdalena Medio y en otros departamentos; éstos fueron factores que influyeron en que sus barrios marginales se expandieran considerablemente. En este contexto, se producen oleadas de homicidios asociados a “limpiezas sociales”. Entre 1999 y 2002, este comportamiento vuelve a subir, coincidiendo con la expansión de las autodefensas hacia las zonas media y alta de la cordillera oriental, desde el sur hacia el norte.

## El flanco derecho de la cordillera Oriental

Esta zona se caracteriza por el asentamiento de las Farc en la década de los noventa y las incursiones de las autodefensas a partir de 2000, periodos que se caracterizarán a continuación, a partir de los indicadores sobre homicidios, secuestros y la intensidad de la confrontación. El tema articulador en cada período es el de los grupos armados irregulares, sin embargo en el segundo se enfocará adicionalmente sobre los temas de las minas antipersonal y los desplazamientos de población. Se presenta así mismo, y de manera muy breve, los efectos en la confrontación armada a raíz de la desmovilización de las ACMM a principios de 2006.

En lo que se refiere a los frentes 9 y 47 de las Farc, su entrada se produce en los años noventa por los municipios de Samaná y parte de Victoria y Norcasia (antes corregimiento de Samaná), como una prolongación de la dinámica de lo que ocurría en el Oriente antioqueño, coincidiendo con la crisis del café producida por la ruptura del pacto mundial del café. En la década de los noventa, este grupo buscó el apoyo del campesinado cafetero y creó una zona de retaguardia que les permitiera ejercer influencia en el Magdalena Medio, al tiempo que abrir corredores de movilidad desde esa región hacia Antioquia y el Pacífico, llegando por el Chocó.



Fuente: Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República



Fuente: Policía Nacional  
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la República

### *a) La década de los noventa*

Se decidió considerar en primer lugar los indicadores de homicidios para caracterizar la inserción de las Farc en la margen derecha de la cordillera oriental. El municipio que más se presta para ello es el de Samaná, porque registra en el conjunto de los años considerados niveles relativamente elevados, así como por sus características geográficas, pues su territorio se encuentra en parte media y alta. Pensilvania, aunque con índices menos altos, fue otro municipio en el que las Farc incursionaron y por ello se utilizará también para describir este periodo. Victoria presenta picos en 1990 y 1997, pero parte de su territorio hace parte del valle, por lo que su comportamiento se asocia en parte al de La Dorada, que no es relevante en este aparte. Norcasia fue por muchos años un corregimiento de Samaná y por lo anterior no se dispone de información histórica. En cuanto a los municipios de la parte occidental de la margen derecha de la cordillera, con excepción de Pensilvania, al que ya se hizo referencia, y de Marulanda, con muy escasa población, sus comportamientos son bastante bajos, pues están siempre por debajo de los 35 hpch.

En lo que respecta a Samaná, sus tasas de homicidio en general no son tan altas en gran parte del periodo considerado, no obstante se destacan por niveles elevados entre 1990 y 1993. En diciembre de 1992, en el corregimiento Florencia, cuatro personas fueron asesinadas por las Farc en el momento que acompañaban el féretro de otra víctima de homicidio ocurrido dos días antes. En 1993, el año que registró el nivel más elevado en la década de los noventa, se produjeron dos homicidios múltiples de tres víctimas cada uno, una de los cuales en Florencia y otra en el entonces corregimiento de Norcasia. Si bien desde ese entonces, los homicidios disminuyen, los registros siguen indicando la participación de las Farc: en 1999, ocurrió una masacre de seis personas en el lugar denominado La Laguna, cometida por esta agrupación. En lo referente a Pensilvania, se debe señalar que en febrero de 1990 se presentó el homicidio de



un concejal, aunque no se precisa su autor; en septiembre de 1991, un campesino y su hija fueron encontrados muertos, después de que fueron sacados violentamente de sus casas en horas de la noche; en abril de 1994, fue asesinado un policía y en julio del mismo año lo fue un comerciante después de haber sido secuestrado. En noviembre de 1995, las Farc dieron muerte a una profesora en El Paraíso y en abril de 1998 al corregidor de Pueblo Nuevo.

Las acciones armadas de la guerrilla, que ostentaron niveles bajos en el conjunto de la década, sirven sin embargo para captar el asentamiento o consolidación de las Farc en la década de los noventa en esta subregión. En 1993<sup>7</sup>, se destacan dos atentados de esta agrupación contra instalaciones de fincas en el corregimiento Florencia, en Samaná, en los meses de febrero y junio, municipio que a la postre quedó en lo esencial bajo el dominio de esta agrupación guerrillera. En 1995, se producen nueve ataques de la guerrilla, la mayoría en Pensilvania, llevados a cabo por los frentes 9 y 47. Se trató principalmente de hostigamientos contra la Policía. En la segunda mitad de la década, los ataques se siguen orientando contra la Policía, con lo que las Farc pretendían minar el poder coercitivo del Estado y dejar espacios libres de su control para aumentar su ingerencia sobre la población y abrir corredores de movilidad. En febrero de 1996, incursionaron en el corregimiento de Florencia, jurisdicción de Samaná, atacaron el puesto de Policía, hirieron a 3 agentes y 6 civiles. Así mismo, en Pensilvania atacaron la estación de Policía y las instalaciones de Telecom. En noviembre de 1997, en la vía que comunica los entonces corregimientos de Norcasia y Florencia, del municipio de Samaná, atacaron a una patrulla de la Policía, cuando transportaba la nómina de pago de los agentes del puesto, los cuales fueron hurtados, y asesinaron a un suboficial y un patrullero; así mismo se produjeron dos atentados a bienes civiles en Pensilvania y Marulanda, contra las instalaciones de la administración del corregimiento y contra un vehículo de transporte, respectivamente.

En esta década, los combates planteados por la Fuerza Pública se caracterizan por su ausencia y muestran que el territorio estaba por fuera del control del Estado y ocurrieron de manera aislada en jurisdicción de Samaná y Pensilvania y recayeron en los frentes 9 y 47. En septiembre de 1995, se produjo un enfrentamiento en el corregimiento de Montebello contra el frente 9, en octubre del mismo año, otro en el sitio Rancho Quemado de Pensilvania contra el frente 47, en mayo de 1997, uno más en el corregimiento Arboleda de Pensilvania y en junio de 1999 el último en el sitio Jardines de Samaná.

### *b) Los años 2000*

Una nueva fase se registra en los años 2000, cuando la expansión de los cultivos de coca dinamiza el poder de las Farc, pero al mismo tiempo atrae la atención de las autodefensas, que empiezan a movilizarse desde el valle del Magdalena y desde el sur de Antioquia hacia el norte de Samaná, como se mostrará más adelante. Así mismo, se incrementa significativamente la intensidad de la confrontación y en particular interviene más decididamente la Fuerza Pública. Año especialmente álgido fue 2002, pues se produce la ruptura de la zona de distensión, y posteriormente se empieza a

7 Entre 1990 y 1992 se trata de hechos en La Dorada, Victoria y el entorno asociados a problemas entre narcotraficantes o ejecutados por autodefensas que no son relevantes para entender lo ocurrido con las Farc.

ejecutar la Política de Defensa y Seguridad Democrática. De la misma manera, las minas antipersonal comienzan a ser utilizadas por la guerrilla de manera más sistemática como método para neutralizar los avances de la Fuerza Pública.

Los cultivos de coca aparecen en el oriente, principalmente en Samaná y Pensilvania aproximadamente en 1999<sup>8</sup>. La superficie cultivada no es en todo caso significativa respecto del total del conjunto nacional, y hacia 2003 no se estimaba por encima de las 1.000 hectáreas; los cultivos crecieron después, al mismo tiempo que aumentó la erradicación, especialmente la manual<sup>9</sup>. En un principio, las Farc promovieron las siembras, al igual de lo que sucedía en el Oriente antioqueño, pero pronto las autodefensas también se interesaron en el negocio ilícito y también los impulsaron. Según una Resolución Defensorial de la Defensoría del Pueblo, las primeras semillas fueron traídas por personas provenientes de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, y por otras que vinieron del Putumayo. Según entrevistas, mientras las autodefensas tradicionalmente manejaron todo el proceso de producción, transformación, compra y comercialización, las Farc hacían énfasis en los cultivos y en el procesamiento de la hoja<sup>10</sup>. En Samaná, existen cultivos y laboratorios, mientras que en Pensilvania sólo hay siembras; en La Dorada y parte de Victoria existen muchos laboratorios, que se benefician de la proximidad de los cultivos. Así mismo, se estableció que los grupos irregulares cobran por hectárea sembrada, por kilo producido, por la entrada de precursores y por el transporte. El negocio ha sido de un tamaño importante en los últimos años y a juicio de un informe de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas, se estimaba que en solo Samaná, en 2004, se movían mensualmente 12 mil millones de pesos por mes, pues se registraban tres cosechas al año<sup>11</sup>.

Las tasas de homicidio son identificativas de las incursiones de las autodefensas y al mismo tiempo de las respuestas de las Farc. Nuevamente, Samaná es el más afectado, pero así mismo estos comportamientos se aprecian en los demás municipios y en particular en Pensilvania, Manzanares y Marulanda.

A partir de 2000, las tasas de homicidio se incrementan sustancialmente hasta 2002 en Samaná, síntoma de las incursiones de las autodefensas, que subieron de sur a norte, y de actuaciones de las Farc. Se pasó de 37 hpch en 2000 a 85 en 2001 y a 158 en 2002. En el primer trimestre de 2000, en San Diego fue asesinado un ex-corregidor y el secretario del corregidor que estaba en ejercicio, por desconocidos. En 2001, se registraron algunos homicidios a nombre del frente 47 de las Farc, pero a su turno otros fueron protagonizados por las autodefensas; en diciembre de 2001, en el corregimiento de San Diego, en disputa entre las agrupaciones irregulares, fueron asesinadas 12 personas y mientras unas versiones se las atribuyeron al frente 47, otras lo hicieron a las autodefensas.

En 2002, el año pico, los homicidios se produjeron por unos y otros. En enero de 2002, en la vereda La Palma, integrantes del frente 47, en un retén ilegal, asesinaron al párroco Arley Arias

8 La aparición de los cultivos de coca se asocia a la crisis cafetera. Se argumenta que el deterioro de los ingresos del caficultor y los diferenciales en salarios por la actividad ilícita, a lo que se suma la presencia de grupos irregulares, favorecieron su implantación. Este argumento es de la Federación Nacional de Cafeteros y fue citado en la Resolución Defensorial No 28, elaborada por la Defensoría del Pueblo, titulada La Crisis Cafetera y las Fumigaciones en el Departamento de Caldas. Manizales, mayo de 2003.

9 En Samaná, se han erradicado 970 hectáreas y en Pensilvania 551; siguen Victoria, Manzanares y Marquetalia. Sistema de Información Geográfica, Gobernación de Caldas.

10 Resolución Defensorial Nacional No. 28. Op. cit.

11 Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas – SAT. Informe de Riesgo No. 48 de 2004. Junio 4 de 2004.

García y a dos personas más que se movilizaban en un vehículo Samurai. El frente 47, después de hostigar la estación de Policía en enero, asesinó a dos personas en su retirada; en febrero, un grupo no identificado asesinó a cinco personas en Santa Helena; en el mismo mes, las autodefensas asesinaron a dos personas más en San Roque, acusándolos de robar ganado para las Farc; en julio, la misma agrupación ultimó a dos más en el establecimiento Don Chucho, en el casco urbano; en septiembre, dos campesinos fueron asesinados por desconocidos en California; en octubre, en el corregimiento San Diego, desconocidos asesinaron con arma de fuego a un comerciante, al panadero y al propietario de la droguería “El Rebajón”; en diciembre, las Farc asesinaron a un campesino en la vereda El Abejorro y a otro en la vereda California.

No obstante que la tasa descendió de 158 en 2002 a 106 en 2003, la situación siguió siendo de preocupación. Las Farc, a través del frente 47, asesinaron a un comerciante, al administrador del Hospital Belalcázar, al personero y a cuatro campesinos en la vereda La Reina; así mismo, se encontró una docena de cadáveres en fosas comunes en las veredas Los Cristales, La Reina, Bella Vista, Buena Vista, Morroseco y Palmar, y en el corregimiento de Florencia. Por su lado, las autodefensas ultimaron a una profesora, a dos agricultores por tener presuntos vínculos con las Farc y a tres más en El Bosque y Pan de Azúcar. En 2004, la tasa descendió a 92, no obstante los acciones de los irregulares contra la población civil continuaron y se siguieron localizando fosas comunes, con especial intensidad actuó el frente 47, que asesinó a un ex-Concejal, a un contratista de la Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC- y a varios campesinos. A principios de 2005, se presentó un enfrentamiento entre las Farc y las autodefensas, en el que murió el conductor de una volqueta del municipio y produjo dos heridos, y estas dos agrupaciones llevaron a cabo homicidios.



Zona Urbana Manizales, Caldas

En 2006, la situación no mejoró de manera significativa, en este sentido en los primeros cinco meses del año se produjeron 14 homicidios. Al respecto, se debe subrayar que el debate electoral fue un factor catalizador, pues en la vereda San Vicente fue asesinado un dirigente del Partido de Unidad Nacional "U", al tiempo que en la vereda El Consuelo una mujer fue ultimada por el frente 47 por hacer proselitismo político; las Farc asesinaron a una promotora de salud del hospital San José, dos integrantes de las Fuerzas Militares fueron asesinados fuera de combate, así como las autodefensas dieron muerte a un miliciano de las Farc.

El municipio de Pensilvania presentó un comportamiento similar, sin embargo en un nivel inferior a partir de 2001. Su tasa de homicidio llegó a 175 en 2000 y a 120 en 2002. Las autodefensas cometieron tres homicidios múltiples en los últimos cinco años, el primero en marzo de 2001, cuando fallecieron tres personas, otro en marzo de 2002 en El Naranjo, en el corregimiento San Daniel, cuando asesinaron a cuatro campesinos, incluido un menor, y en mayo de 2005, en la vereda El Higuierón, dando muerte a cuatro personas más. Las autodefensas y las Farc perpetraron igualmente varios asesinatos selectivos. Las Farc actuó en las veredas Agua Bonita, El Congal, Quebrada Negra y en el sector del Alambrado; igualmente fue encontrada una fosa común en El Jardín. Las autodefensas actuaron en la vereda La Estrella del corregimiento La Arboleda. En el municipio de Manzanares, las tasas marcaron 91 y 89 en 2001 y 2002. Estos hechos se atribuyeron en gran medida a las autodefensas pues en septiembre de 2001, en el corregimiento Las Margaritas, asesinaron a tres campesinos que eran hermanos; en enero de 2002, a tres campesinos en San José; en abril de 2002, a otros dos en la vereda Norcasia; en enero de 2005, un administrador falleció cuando fue incinerada una finca por desconocidos en la vereda El Jordán y en febrero de 2006, de nuevo en Las Margaritas fueron ultimadas dos personas más.



Plaza de Bolívar Samaná, Caldas

En el municipio de Marulanda, en zona de cordillera alta, las tasas, muy elevadas, se explican en parte porque es un municipio muy poco poblado; en lo esencial los hechos fueron atribuidos a las Farc. En Marquetalia, las Farc asesinaron a la ex-alcaldesa del municipio María Rubiela Hoyos en febrero de 2002 y hubo algunas incursiones de las autodefensas en 2000.

Analizando ahora la intensidad de la confrontación armada, su nivel fue influenciado ante todo por los combates librados por iniciativa de la Fuerza Pública, que representaron el 57% de todas las acciones armadas entre 2000 y los primeros cuatro meses de 2006, después por los ataques a bienes civiles y los sabotajes a la infraestructura, con el 28% y en menor medida por los ataques de las Farc a la Fuerza Pública, con el 15%. Los combates crecieron significativamente en 2002, como respuesta al incremento de los ataques de las Farc con ocasión de la ruptura de la zona de distensión, no obstante se incrementaron aún más en 2003 con el inicio de la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática; entre 2004 y 2005 bajan al igual que en los primeros meses de 2006. La mayoría de ellos se produjeron en Samaná (58 de 91), pero también en Pensilvania (14 de 91); siguieron Marulanda con 7, Norcasia y Manzanares con 5 cada uno, y Marquetalia con 2.



Fuente: Boletines Diarios del Das  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República

En líneas generales, se buscó neutralizar la capacidad bélica de las Farc para efectuar atentados en las vías y a la infraestructura, limitar sus posibilidades para nutrirse de los cultivos de coca e interrumpir corredores de movilidad. Estos objetivos se han cumplido en parte, pues la agrupación guerrillera se moviliza en unidades más pequeñas, tiene menos capacidad para hacer presencia en un solo sitio por largos períodos de tiempo, su incidencia en los cascos urbanos ha disminuido, lo mismo que sus posibilidades de sorprender en la red vial. De hecho, la presencia de la Fuerza Pública se ha incrementado en forma importante, incluido el pie de fuerza de la Policía, y en particular se recuperó el control del casco urbano de Samaná, por

muchos años bajo el asecho de los grupos armados irregulares. Se debe señalar al respecto que en este municipio, de gran extensión, se registró por muchos años un vacío en términos de seguridad, pues no existía coordinación, particularmente entre los batallones Ayacucho y Quimbaya, puesto que ninguno se responsabilizaba realmente de la jurisdicción rural de ese municipio; más recientemente, con la creación de la Fuerza de Tarea Orión y con la asignación de responsabilidades más concretas a las unidades con mando en la ciudad de Armenia, se ha cubierto con más propiedad las áreas antes descubiertas. Igualmente, el corregimiento de San Diego, en Samaná, que fue objeto de disputas entre las agrupaciones armadas irregulares, hoy cuenta con la presencia de Policía y Ejército.

En lo que se refiere a los ataques o acciones armadas de las Farc, predominaron los realizados contra bienes civiles<sup>12</sup> y los hostigamientos a la Fuerza Pública; son mucho menores los ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, y los ataques a poblaciones, a pesar de haberse registrado dos casos de mayor intensidad, uno en julio de 2000 y el otro en marzo de 2006.

Los ataques contra bienes civiles son los más numerosos y básicamente fueron destrucción de torres, vehículos incinerados, destrucción de puentes y de infraestructura de fincas; algunos de estos hechos se produjeron en el marco de paros armados, destacándose Samaná. En este municipio, fueron especialmente afectados la vía a Victoria, el casco urbano, el corregimiento San Diego (muy disputado entre las Farc y las autodefensas) y el corregimiento Cañaverál. Un año especialmente crítico en este aspecto fue 2002, cuando se produjeron nueve ataques a bienes civiles y sabotajes a la infraestructura. En febrero de 2002, en la vereda La Primavera, las Farc dinamitaron dos torres; días después incineraron dos vehículos de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, al tiempo que varios vehículos particulares en la vía a Victoria; a finales del mismo mes, dinamitaron una torre en el corregimiento Cañaverál de Victoria. En marzo, incursionaron en el corregimiento de San Diego de Samaná e incineraron material electoral; en abril, entraron nuevamente a Cañaverál, en el municipio de Victoria, asesinaron a un particular y saquearon las viviendas, al tiempo que dinamitaron y derribaron 11 torres de conducción de energía de propiedad de ISA, ocasionando la interrupción del servicio eléctrico en los municipios del oriente del departamento. Días después, entre Samaná y Victoria, realizaron un retén ilegal y obstaculizaron el tráfico, atravesando dos buses intermunicipales, incineraron una volqueta e instalaron un campo minado en los alrededores. En octubre, activaron varias granadas de fragmentación contra una residencia del casco urbano de la misma población; finalmente, en diciembre, en la vereda San Daniel de Norcasia, atacaron otra torre. Por otra parte, a partir de 2005, estos atentados han aumentado en Manzanares. En este sentido, en el mes de mayo, en el sector El Matadero, integrantes del frente 47 de las Farc activaron una carga de dinamita en la planta de aserrijo de propiedad de la familia del senador Oscar Iván Zuluaga y en abril de 2006 incineraron unas instalaciones de su finca La Campiña; igualmente han efectuado atentados contra torres y contra vehículos.

<sup>12</sup> Incluyen también los ataques cometidos contra la infraestructura.

Los ataques contra la Fuerza Pública han sido menos numerosos. Sin embargo, se destaca un ataque al corregimiento Arboleda, del municipio de Pensilvania, llevado a cabo por los frentes 9 y 47 en julio de 2000; los guerrilleros atacaron con armas largas y cargas explosivas el puesto de la Policía, dando muerte a ocho agentes, asesinando a tres civiles, secuestrando a cuatro agentes y produciendo daños colaterales en la población. Al día siguiente, en el mismo corregimiento, en un enfrentamiento, los dos frentes mencionados dieron muerte a catorce integrantes de la Policía, entre ellos un intendente, un capitán y doce más entre patrulleros y agentes. Por otro lado, en marzo de 2006, después de que se desmovilizaron las ACMM, el frente 47 de las Farc atacó con explosivos y armas de fuego el corregimiento de Montebonito, del municipio de Marulanda, resultando muertos un particular y su hijo de 8 meses de edad, así como un agente de la Policía; del mismo modo quedaron heridas 8 personas, entre ellos una menor y tres agentes, fue secuestrado otro miembro de la institución, quedó destruida la estación de Policía, nueve viviendas fueron incineradas y quedó afectado parcialmente el puente sobre el río Perrillo, que comunica con el departamento del Tolima. Se han efectuado otros pequeños ataques contra las instalaciones de la Policía, pero de una magnitud menor; ocurrieron en Samaná, en mayo de 2004 y en el corregimiento de Florencia, del mismo municipio, en marzo de 2006.

Entre 2002 y 2006, se han producido 17 hostigamientos, 11 de ellos en Samaná, 5 en Pensilvania y 1 en Marulanda. Al respecto, se debe señalar que en enero de 2005 en el corregimiento San Diego, guerrilleros del frente 47 de las Farc atacaron con armas de fuego a dos helicópteros, donde se trasladaba una comisión de la Policía integrada por el Director General de la institución Jorge Daniel Castro Castro, el Subdirector Operativo General Alonso Arango Salazar, el Director Regional Eje Cafetero Mario Gutiérrez y el senador Óscar Iván Zuluaga, cuando inspeccionaban la zona para instalar un puesto de Policía; por lo demás fueron pequeños ataques a instalaciones de Policía, a patrullas antinarcóticos y a unidades militares en movimiento.

En lo relacionado con los secuestros, las cifras evidencian que las Farc concentran la mayor responsabilidad en cuanto a este delito. En 2000, de 37 plagios, 23 fueron cometidos por esta guerrilla, 9 por desconocidos, 2 por parte de las autodefensas, quienes estaban iniciando su incursión en estos territorios y 3 perpetrados por el ELN. De las 23 víctimas de secuestros realizados por las Farc, 11 fueron plagiadas en un secuestro masivo, ejecutado por miembros del frente 47 en un retén ilegal que instalaron en la vereda Rancho Largo del municipio de Samaná. Adicionalmente, varios de los secuestros perpetrados por las Farc en dicho año, fueron dirigidos contra servidores públicos o contratistas de las obras que se estaban realizando en los municipios, buscando incidir en el desarrollo de las mismas.

A pesar de la disminución presentada en 2001, en 2002 se da un leve repunte del fenómeno, debido al secuestro masivo de seis conductores perpetrado por las Farc en la vía que comunica a

Samaná con Victoria. A partir de dicho año, se inicia una caída en el número de secuestros, hasta el punto de que en los primeros cinco meses de 2006, no se habían presentado secuestros en el departamento. El descenso en los plagios está relacionado con el impacto de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, gracias al aumento significativo de la Fuerza Pública en las zonas más neurálgicas de la subregión, lo que le ha restado presencia a las Farc y ha disminuido su capacidad de acción. Por otra parte, responde también a la consolidación de las ACMM y al aumento de los ingresos de las Farc provenientes de la comercialización de la cocaína, disminuyendo así su necesidad de recurrir a esta modalidad de financiación.



Fuente: Fondelibertad

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República

Adicionalmente, los paros armados han sido una estrategia utilizada por los guerrilleros para alterar la situación de orden público. Esta práctica ha sido reiterada entre 2003 y 2006, y particularmente en los meses previos a las elecciones para el Congreso, en marzo de este último año. En mayo de 2003, entre Pensilvania y Arboleda, en el marco de un paro armado en el que argumentaban que las autoridades patrocinaban a los grupos de autodefensas, las Farc incineraron cuatro vehículos; a nivel regional, habían ordenado la suspensión del transporte y amenazaron con destruir el puente sobre el río Guarinó, que comunica a Manzanares con Petaqueros. En 2006, en los meses de febrero y marzo, esta práctica volvió a presentarse. Las Farc amenazaron a la población con un paro armado en Samaná, Manzanares, Pensilvania y Marquetalia, con lo que lograron interrumpir en parte el servicio de transporte en el oriente del departamento; paralelamente, en Samaná colocaron explosivos en el puente sobre el río Manso que une a los corregimientos Berlín y San Diego, causando daños materiales parciales; incineraron un bus en Rancho Largo, del mismo municipio, así como otro en jurisdicción de Manzanares.



Por otro lado, el uso de minas antipersonal en el departamento y en la subregión está ligado a la nueva dinámica de la confrontación que se registra a partir de los años 2000, donde confluyen -como se anotó anteriormente- la expansión de los cultivos ilícitos y el incremento de la intensidad de la confrontación, razón por la cual dichos artefactos explosivos empiezan a ser utilizados, no sólo como estrategia para frenar el avance y recuperación del territorio nacional por parte de la Fuerza Pública, sino también como mecanismo de protección de los cultivos ilícitos por parte de los grupos armados ilegales.

Como se observa en el gráfico adjunto, aunque se evidenció la existencia de dicho fenómeno en los años noventa, es a partir de 2002 cuando las minas empiezan a ser empleadas de manera creciente, coincidiendo con el aumento en el número de combates adelantados por iniciativa de la Fuerza Pública y por la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Orión. Con respecto a las víctimas, la mayoría de ellas (68%) se han concentrado en la región oriental, siendo los militares los más afectados. De las 83 víctimas que se registran en la zona *Oriente*, entre 2002 y mayo de 2006, 59 de ellas se presentaron en Samaná, seguido por Pensilvania con 10, Norcasia con 5, La Dorada y Marulanda con 4 cada uno y Manzanares con 1. Lo anterior muestra que los accidentes ocurren en los municipios donde se concentra la mayoría de los cultivos ilícitos en el departamento, según la información registrada en la Resolución Defensorial Nacional No. 28.



Fuente: Observatorio de Minas antipersonal  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República.

Con respecto al fenómeno del desplazamiento en el departamento, éste empezó a incrementarse a partir del año 2000, alcanzando su punto más alto en 2002, año en el cual fueron expulsadas 15.526 personas. El mayor número de personas desplazadas se registraron en la región *Oriente*, en especial en Samaná y Pensilvania. El primer municipio es el más crítico en este ámbito, no sólo en la región sino también en el conjunto del departamento,

en especial por los desplazamientos masivos que se han producido. En el 2000, salieron de Samaná 131 personas, número que se multiplicó casi 18 veces para el siguiente año, cuando se registró un desplazamiento masivo de 2.031 personas; el comportamiento ascendente siguió en 2002, cuando alcanzó su punto más alto con 7.589 personas expulsadas, la mayoría de ellas producto de dos desplazamientos masivos registrados en febrero y abril del mismo año, debido a incursiones de las Farc en el corregimiento de San Diego, lugar donde tenían presencia las autodefensas. En 2003, disminuye el número de personas desplazadas de dicho municipio a 3.199, en 2004 pasa a 1.916, pero en 2005 dicha cifra repunta de nuevo hasta alcanzar casi los mismos niveles registrados en 2002. En 2005, en el municipio de Samaná, se presentaron dos desplazamientos masivos, uno en abril y otro en noviembre. El primero se debió al inicio de las fumigaciones de cultivos ilícitos en Pensilvania y Samaná, lo que produjo el desplazamiento de más de 4.000 personas, quienes presentaron ante el Gobierno un pliego de condiciones con el ánimo de promover la erradicación manual. En noviembre, el desplazamiento fue producto de combates entre la guerrilla de las Farc y las autodefensas del Magdalena Medio, por el dominio territorial de la zona, lo que obligó a que más de 2.200 personas salieran de 13 veredas que hacen parte del corregimiento de Encimadas.



Fuente: Consejería Presidencial para la Acción Social  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República

En Pensilvania, al igual que Samaná, se presentó un aumento en el año 2002, debido a los hostigamientos por parte de las Farc en los corregimientos de San Daniel y Pueblo Nuevo, lo que provocó el desplazamiento de 2.700 personas hacia la cabecera municipal. En los años siguientes, el número de personas que salieron de dicho municipio fue mucho menor, aunque vuelve a tener un aumento en 2004, por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la presión por parte de las ACMM sobre los habitantes de varios

corregimientos, con el ánimo de fortalecer su presencia armada y ampliar su dominio territorial.

La desmovilización de las ACMM se produjo en febrero de 2006 y por lo anterior, es difícil medir su impacto. En las entrevistas, se argumentó que en la zona de cordillera, en la parte media y en la más alta, las Farc han buscado ocupar los espacios vacíos dejados por las ACMM, dinámica que explicaría el ataque al corregimiento de Montebonito en marzo. Así mismo, se han producido paros armados y se han incinerado vehículos; sin embargo, se debe considerar que estos comportamientos se venían presentando en los últimos años. Respecto del ataque en Montebonito, se tiene que destacar que no necesariamente es consecuencia de la desmovilización, porque a este municipio de cordillera no habían llegado con fuerza las autodefensas, es un corredor tradicional de la guerrilla y presenta dificultades para que la Fuerza Pública realice un cubrimiento efectivo sobre todo el territorio. En lo que respecta a los paros armados, los retenes ilegales y los ataques a la infraestructura, se debe tomar en cuenta que se produjeron en la coyuntura previa a las elecciones, tradicionalmente más agitada en términos de acciones por parte de los grupos armados irregulares. Es evidente, que a pesar de los esfuerzos, la capacidad de la Fuerza Pública sigue siendo insuficiente, pues el territorio por cubrir es muy extenso y es poco probable que se logren evitar o neutralizar la totalidad de estos casos.

Un aspecto que sobresale en las entrevistas es que las ACMM siguen vigentes en las zonas planas y en parte de Samaná, particularmente alrededor de las actividades de narcotráfico que les dan sustento. Algunas fuentes señalan que este grupo dispone de hombres que siguen haciendo inteligencia, mantiene en funcionamiento laboratorios y la fuerza desmovilizada es inferior a la que funcionaba anteriormente. Por otro lado, se argumenta que los índices delincuenciales han aumentado en La Dorada.

## Norte

Esta subregión ilustra la presencia de las autodefensas, a través del frente Cacique Pipintá del bloque Central Bolívar, el cual se ha estructurado sobre la base de redes de narcotraficantes con tradición en la región desde los años 2000. Este grupo tiene presencia en los cascos urbanos, en las zonas planas y el cinturón cafetero, situación que explica en buena parte el incremento de las tasas de homicidio, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. Alrededor de las autodefensas, sobresale el tema de las relaciones entre *mafia* y política y se destacan las relaciones entre estructuras criminales rurales y urbanas, puesto que en Aguadas por ejemplo existen expresiones o vasos comunicantes con la oficina de cobro de *La Terraza*, con sede en años pasados en Envigado y con mucha influencia en Medellín. Lo anterior se expresa en la existencia de la banda o estructura criminal llamada “Los Chócolos”, muy articulada al narcotráfico, que ha incidido en la política local y que alterna alianzas y disputas con el frente Cacique Pipintá por el control político del municipio.

Por otro lado, el frente 47 de las Farc también tiene presencia en esta zona, sin embargo en la zona más montañosa y en parte de la franja cafetera, por lo que su actividad en Filadelfia y La Merced es prácticamente inexistente; de cierta manera, su accionar en la región es una prolongación de lo que ocurre en el *Oriente*, por lo que usa las zonas de montaña como refugio y retaguardia, así como corredor hacia Antioquia y el centro sur de Caldas y para establecer conexiones con la región del Pacífico. En resumen, su protagonismo armado es bajo y el pico de sus acciones armadas se presenta en 2003 con diez de ellas. Adicionalmente, esta estructura ha sido bastante disminuida por las autodefensas y por el accionar de la Fuerza Pública.



Fuente: Boletines diarios del Das, Policía Nacional y Fondelibertad  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República  
Eje izquierdo: tasas de homicidio  
Eje derecho: secuestro e intensidad de la confrontación

Es posible interpretar la evolución de las autodefensas y de estructuras criminales tales como “Los Chócolos” a través de los homicidios. Éstos sobresalen por encima de las acciones armadas -a través de las cuáles se mide la intensidad de la confrontación- y de los secuestros. Los homicidios empiezan a crecer a partir de 1996<sup>13</sup>. En un principio, estas estructuras eran identificadas como autodefensas relacionadas con las AUC lideradas por Carlos Castaño, y sólo se les llamó frente Cacique Pipintá en el curso de los años 2000; no deja de ser diciente que el pico de las tasas de homicidios se presente en 2002, precisamente cuando esta estructura ya se había consolidado como tal. Sobre “Los Chócolos”, no se tienen indicios de su fecha de llegada a Aguadas, no obstante se presume que en la medida en que el narcotráfico tiene tradición en este municipio, sus raíces se remontan al menos a una década atrás; esta estructura se ha fortalecido en los últimos años y una característica que presenta en estos municipios, y particularmente en Aguadas, es que se han involucrado en los negocios legales y tienen amplia influencia en la política local.

Consultando la información de la base de datos construida en el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

<sup>13</sup> Las autodefensas ya se habían insinuado en 1996, pero según entrevista, es a partir de 1998 cuando se ubica la llegada de Ernesto Baez y se evidencia el accionar de las autodefensas con más intensidad.



Cooperativa de Caficultores. Manzanara, Caldas

resulta interesante observar que los homicidios en su mayoría fueron cometidos por autodefensas y sicarios. De un total de 106 perpetrados entre enero de 2000 y abril de 2006, 35 fueron por parte de las autodefensas, 32 de sicarios, 14 de las Farc y 25 de grupos no identificados. Sobresale Aguadas con 45, sigue Salamina con 33, y muy por debajo están Aranzazu con 11, Filadelfia con 8, Pácora con 6 y La Merced con 3. Si bien es cierto que unas pocas víctimas están asociadas a presuntos apoyos de las Farc, en su gran mayoría no se dispone de información suficiente y se asume que estas muertes están relacionadas con problemas de narcotráfico o son protagonizados para apoderarse de tierras y otros móviles de tipo económico.

Un aspecto que sobresale entre los homicidios es el de los asesinatos políticos, que ayudan a ilustrar la incidencia de estructuras criminales y de las autodefensas en la política local. De hecho, la llegada de grupos emergentes que adquirieron su fortuna a través del narcotráfico, explica a su turno un relevo en la clase política local. Los políticos tradicionales, entre ellos Dilia Estrada por el partido Conservador, o los representantes en el nivel local de las facciones liberales de Víctor Renán Barco y Omar Yepes, que habían controlado tradicionalmente el poder, fueron relevados por la vía de la violencia. En la actualidad, los "Chócolos" y el frente Cacique Pipintá inciden de manera significativa

en el poder local de Aguadas. Según algunas entrevistas, en los años recientes ha habido candidatos que no se han podido presentar a los debates electorales por no contar con el aval del frente Cacique Pipintá o de los "Chócolos". Lo anterior coincide con versiones de prensa que citaron el caso de Dilia Estrada, en la actualidad marginada de la política de Aguadas por presiones violentas.

En Aguadas y los demás municipios de la zona estudiada no son pocos los homicidios que ocurrieron en este marco. En noviembre de 1990, fue asesinada frente a su residencia en Aguadas la abogada y concejal liberal María Romelia Martínez Mejía. En octubre de 1993, fue asesinado Jaime Rodríguez Fontalvo, secretario de la alcaldía de Salamina. En agosto de 1995, fue ultimado también en Salamina el exconstituyente Alberto Gutiérrez. En noviembre del mismo año, ocurrió el homicidio de Eliécer Álvarez en Aguadas, hermano de la jefe del grupo de Extranjería del Das en ese departamento. En septiembre de 1997, fueron muertos el tesorero del candidato a la alcaldía de Aguadas, Iván Darío Gómez Estrada, hijo de Dilia Estrada, que era una de las personas políticas con más influencia en la región. En julio de 1999, fue asesinado en Aguadas un funcionario de la alcaldía de Salamina. En octubre de 2000, ocurrió en Aguadas el homicidio del candidato en segundo renglón al Concejo de este municipio, por el Movimiento Independiente para el Desarrollo de Aguadas -*Mida*-, Orlando Ely Sossa Pineda.

En agosto de 2001, cayó el Juez Segundo Penal Municipal, Carlos Arturo Moreno González, en Salamina. En octubre, fue muerto en Aguadas un Técnico Judicial de la Fiscalía. En diciembre, fue asesinado en el corregimiento Arma, el ex-sacerdote y concejal liberal de Aguadas, Francisco De Paula López Delgado y su empleada María Fabiola Ospina Arias. En abril de 2002, en Aranzazu, fue asesinado el vicepresidente de Educadores Unidos de Caldas, Educal y secretario del Comité Permanente de los Derechos Humanos en Caldas, Jesús Hernández Ortiz, y el ex-empleado de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, José Robeiro Pineda Galeno. En agosto del mismo año, Nelson González Grisales, hermano del Representante a la Cámara José Oscar González Grisales, fue ultimado en Aguadas, en ese entonces del Movimiento Liberal Barquista. En agosto de 2003, en el corregimiento de Arma en Aguadas, las Farc habrían asesinado al alcalde Iván Rincón Henao; sin embargo, otras versiones atribuyen el hecho a las autodefensas o al narcotráfico que opera a través de redes criminales. En mayo de 2004, también en Aguadas, el frente Cacique Pipintá asesinó con arma de fuego a Ramiro López Ramírez, hermano del Concejal conservador Fernando López Ramírez, asesinado también en mayo en Manizales. En noviembre de 2004, en la vereda Blanquita de Aguadas, en la finca Italia, fue asesinado Jorge Iván González Grisales, hermano del también asesinado congresista Oscar González Grisales.

Si bien se presentaron algunos homicidios contra representantes del poder judicial, en lo esencial se trató de homicidios asociados a la política local y regional. Así mismo, se han presentado algunos homicidios que han tenido incidencia en la región, pero se produjeron por fuera de ella. El caso más notable es el del Representante a la Cámara Oscar José González Grisales, perpetrado el 18 de marzo de 2005 en el directorio local de su partido, en pleno centro de

Manizales<sup>14</sup>. Así mismo, el 21 de mayo del mismo año fue asesinado Fernando López Ramírez, concejal de Aguadas, en el sector de La Galería de Manizales; en febrero había salido ileso de un atentado en Aguadas por lo que decidió dejar el municipio.

Descifrar en profundidad lo que ocurre es asunto difícil, sin embargo un aspecto que se destaca es el uso que hacen las autodefensas de las bandas criminales. En el caso del representante González, algunas fuentes aseguran que el homicidio fue perpetrado materialmente por integrantes de las llamadas oficinas de cobro de Medellín o Envigado. Versiones parecidas existen respecto del asesinato del Director de La Patria, Orlando Sierra, asesinado el 1 de febrero de 2002. A lo anterior, se tiene que añadir que los “Chócolos” en Aguadas tienen relaciones con estas mismas estructuras. Igualmente, otras fuentes mencionaron, que en otros asesinatos con móviles políticos ha habido capturas de victimarios que han actuado en Caldas y que han confesado trabajar para la banda de “La Terraza”.

Si bien las autodefensas han utilizado las bandas, no parece existir una estrecha articulación entre ellas, por lo que con frecuencia surgen fricciones; de hecho se han presentado divisiones entre los “Chócolos” y el frente Cacique Pipintá. Alrededor del asesinato de Oscar González, dos de cuyos hermanos también fueron asesinados, se tejieron varias versiones. No sobra recordar que *Ernesto Báez*, en un principio relacionado con el Cacique Pipintá, acusó al alcalde de Aguadas de ser el autor intelectual del homicidio. Respecto de este caso, se comenta que el alcalde era del grupo de González, pero que éste, muy posiblemente por presión armada, comenzó a responderle a los “Chócolos”, que en la medida que tienen conexiones con las oficinas de cobro de Medellín y su entorno, a su turno le responden a *Don Berna*. Posteriormente, *Báez* se retractó, posiblemente porque así se lo ordenó *Don Berna*. Independientemente de la veracidad de esta versión, lo cierto es que políticos que antes tenían ingerencia en la política local han sido asesinados o desplazados.

El frente Cacique Pipintá no se desmovilizó en Santuario, Risaralda, el 15 de diciembre de 2005, cuando lo hizo el frente Héroes de Guática, otra estructura vinculada al bloque Central Bolívar. No se puede excluir que esto tenga que ver con las fricciones entre el frente Cacique Pipintá y las redes criminales asociadas al narcotráfico. Hacerlo hubiera implicado cederles espacio a éstas últimas. Según otras versiones, se afirmó que la demora en la desmovilización se debe a que en realidad *Báez* no tiene mando sobre esta facción que en sus orígenes había sido una prolongación del bloque Metro de las AUC, bajo el mando del asesinado alias “Rodrigo” o “Doble Cero”. Así mismo, se analiza que *Báez*, con intereses políticos en la región, habría demorado la desmovilización, para que la estructura de Caldas no se percibiera más débil que la de Risaralda o subsumida a ésta; sería un asunto de diferenciación y una preocupación por afirmar su poder en Caldas.

Por otra parte, el tema de la guerrilla de las Farc en la subregión es marginal comparada con el poder de narcotraficantes y autodefensas. No obstante, resulta interesante observar que la intensidad de la confrontación registró un pico en 1994 y creció mucho entre 2002 y 2004. En 2004, la intensidad de la confrontación arrojó 10

14 Ver: El asesinato del congresista Oscar González sumió en la incertidumbre a los votantes. En: [www.fcm.org.co](http://www.fcm.org.co). Federación Colombiana de Municipios, 12 de abril de 2005.

incidentes dispersos en varios municipios: cuatro en Pácora, dos en Salamina y Aguadas cada uno, y una en Filadelfia y La Merced. Se destacan aquellos municipios como Pácora, Aguadas y Salamina que tienen territorio también en zona montañosa, espacio en el que se mueven las Farc en Caldas; en las partes más calientes y bajas, su accionar es muy limitado, pues es el espacio dominado por el narcotráfico y las autodefensas. A lo anterior, se debe agregar que cuatro de las acciones armadas consideradas fueron combates planteados por las Fuerzas Militares; por lo demás se trató de cuatro pequeñas emboscadas, un hostigamiento y un ataque a bienes civiles, sin mayor trascendencia. Lo ocurrido entre 2000 y 2006 en lo esencial guarda las mismas características. De un total de 43 incidentes, 18 ocurrieron en Aguadas, 17 en Salamina, seis en Pácora y uno en Aranzazu y La Merced respectivamente. Más de dos tercios fueron combates planteados por las Fuerzas Militares, pues ocurrieron 32; adicionalmente, siete fueron atentados a bienes civiles y/o sabotajes a la infraestructura, y sólo cuatro fueron ataques leves a la Fuerza Pública.

Paralelamente al aumento de los combates entre 2002 y 2004, debido a una mayor presencia de las tropas en la zona, también se registró un incremento en el número de eventos por minas antipersonal, en especial de los accidentes, los cuales pasaron de dos en el 2002 a ocho en el 2004. Estos últimos arrojaron 14 víctimas, todas ellas militares, lo que comprueba nuevamente que dichos artefactos son utilizados por las Farc para frenar el avance de la Fuerza Pública, la cual ha incrementado sus operaciones en la zona norte del departamento, en especial en contra del frente 47 de las Farc.

Con respecto al tema del desplazamiento, de nuevo 2002 es el año más crítico para la zona considerada, cuando se movieron forzosamente 837 personas, producto de la presión de los grupos armados y el incremento de la intensidad de la confrontación. Sin embargo, a diferencia de la región oriental, en dicha zona no se han registrado desplazamientos masivos, han sido más desplazamientos individuales, producto de la presencia y dominio de ciertos actores armados.

## Occidente

El occidente presenta dos dinámicas. La primera ocurre en el *Alto Occidente* (noroccidente) y la segunda en el *Bajo Occidente* (suroccidente). La primera tiene rasgos muy particulares, pues la problemática se centra en las comunidades indígenas, especialmente en Riosucio y Supía, y la población afrocolombiana, en Marmato y Supía. El frente 47 también llegó a esta subregión, proveniente de Antioquia en los años noventa; posteriormente se ubicó el frente Aurelio Rodríguez, alcanzando mayor influencia en la actualidad, puesto que el frente 47 se concentra cada vez más en las regiones oriental y norte del departamento. Por otro lado, las autodefensas no tienen una presencia física en el *Alto Occidente*, sino que se desplazan desde la región *Norte* del



departamento, de Aguadas principalmente, y actúan por medio de comisiones. La segunda dinámica se desenvuelve en el *Bajo Occidente*, donde la problemática central es el peso de estructuras criminales dinamizadas por el narcotráfico, que confluyen con grupos de autodefensas.

De acuerdo con lo anterior, mientras la dinámica en el Norte del departamento y el *Alto Occidente* está más relacionada con la situación de Antioquia, la dinámica del sur y el *Bajo Occidente* está más influenciada por Risaralda y el Valle del Cauca. Es por ello que el frente Héroes de Guática, presente en Risaralda, alcanzaba a tener alguna expresión en el extremo sur occidental. En lo que se refiere a la guerrilla, el EPL ha tenido presencia en el occidente, no obstante se circunscribe a dos municipios; Riosucio, en el *Alto Occidente*, y Anserma, en el *Bajo Occidente*, ambos limitrofes de Quinchía, en Risaralda.

## El Alto Occidente o Noroccidente



Limpeza del grano. Samaná, Caldas

La presencia de los grupos irregulares en el *Alto Occidente* es estratégica en la medida en que es una salida al Pacífico, por el Chocó, y posibilita la movilidad por el occidente del país. Las Farc, a través del frente Aurelio Rodríguez, ubicaron su retaguardia en buena parte de la zona indígena. Las autodefensas, por su lado, movilizaron desde el norte "bloques contrainsurgentes" hacia las zonas donde había influencia de la guerrilla, con el propósito de destruir sus redes de apoyo y controlar los corredores de movilidad. Si bien las autodefensas aparecen en los noventa, el Cacique Pipintá del BCB, cuyas principales bases se ubican en el norte del departamento, empieza a actuar en 2000. Entre los afectados por guerrilla y autodefensas, aparecen integrantes de los resguardos

y/o asentamientos de Cañamomo- Lomapieta, San Lorenzo, La Montaña, Escopetera Pirza y otros, en Riosucio y Supía, en Caldas<sup>15</sup>.

La intensidad de la confrontación y las disputas entre las Farc y las autodefensas, que tienen su propia lógica, han repercutido en las comunidades indígenas. No obstante, en este marco se ha dinamizado la lucha indígena, no sólo por la recuperación y el saneamiento de tierras de resguardos, sino por su irrupción en la política local, que desafió el poder de los partidos tradicionales.

A finales de los años noventa, se produce un fortalecimiento de la guerrilla y las autodefensas, sin embargo no se había planteado todavía una confrontación entre estas agrupaciones con las dimensiones que adquirió a partir de 2000. Entre 1990 y 1999, las Farc sólo ejecutó atentados a bienes civiles y la Fuerza Pública planteó pocos combates. La intensidad de la confrontación, que ilustra lo relacionado con la guerrilla, empieza a subir desde 1999 en el *Alto Occidente*, pero adquiere su nivel más alto en 2003. Suben en especial los ataques de la guerrilla entre 1999 y 2002, mientras que los combates planteados por la Fuerza Pública lo hacen entre 2001 y 2003.

En diciembre de 2001, en el resguardo de San Lorenzo, subversivos del frente Aurelio Rodríguez de las Farc atacaron con cargas explosivas y armas de fuego a la estación de Policía, resultando herido un agente, muerta la particular Olga Liliana Largo y heridos tres más; así mismo destruyeron las instalaciones y varias viviendas aledañas. El 24 de febrero de 2002, se produjo nuevamente un hostigamiento contra la misma estación. El 2 de marzo de 2002, en la vía a Supía, sitio La Herradura, integrantes de las Farc emboscaron con armas de fuego a una patrulla de la Policía, hiriendo a dos miembros de la institución y secuestrando a un comerciante. Una semana después, en la misma vía, en el sector de La Balastrea, se produjo otra emboscada a la Policía. En mayo de 2003, en el sector del Matadero, hostigaron a una patrulla del Ejército. En noviembre del mismo año, se produjo otro en la vereda El Rosario y en noviembre de 2004 atacó a una patrulla de la Policía en zona rural. Hubo, igualmente, nueve atentados contra la infraestructura entre 2000 y 2004, la mayoría ejecutados por las Farc.

La presencia de las Farc se ha visto también reflejada en la ejecución de secuestros, que han hecho de esta región la más afectada por dicho flagelo dentro del conjunto del departamento. A pesar de que los secuestros perpetrados por las Farc vienen aumentando desde 1997, en 2002 se registró el pico más alto con 41 víctimas, la mayoría de ellas producto de un hecho masivo llevado a cabo el 6 de agosto en Riosucio, donde fueron plagiadas 24 personas, 18 de las cuales fueron liberadas por presión de la Fuerza Pública. Los seis restantes pertenecían a la Empresa de Ingenieros Forestales Asociados (IFA), quienes fueron liberados días después. Para 2003, se evidencia una clara disminución, al ser registrados 13 secuestros; de nuevo la mayoría de las víctimas fueron plagiadas masivamente en un retén ilegal instalado por los subversivos del frente Aurelio Rodríguez de las Farc, en la vereda El Trébol de Supía, quienes posteriormente fueron liberados debido a la presión de la Fuerza Pública. Desde 2004, este

15 Las comunidades indígenas tienen presencia en Riosucio y Supía principalmente. De acuerdo con la "Caracterización de la comunidad indígena de Caldas", elaborado por la Secretaría de Integración y Desarrollo Social de la Gobernación de Caldas, en el municipio de Riosucio se encuentran los resguardos de San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, Cañamomo Lomapieta (este resguardo cubre parte de Supía) y Escopetera Pirza.

grupo no ha cometido secuestros en la zona, como consecuencia del aumento de la vigilancia en las carreteras de la región por parte la Fuerza Pública y el incremento del pie de fuerza.



Fuente: Fondelibertad  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República

Ahora bien, es importante referirse y precisar algunos aspectos respecto de las luchas indígenas, para entender mejor la problemática analizada. En Caldas, se habla de varios resguardos, pues en el período colonial fueron reunidos grupos de diferentes etnias en cada uno de los resguardos constituidos, al tiempo que se mezclaron con esclavos negros que fueron traídos para trabajar en las minas de oro. Si bien los resguardos coloniales sobrevivieron, parte de sus territorios fueron ocupados por colonos blancos y mestizos, una porción de la tierra fue cedida y muchos de los indígenas salieron de los mismos y se integraron en otros grupos sociales<sup>16</sup>. Durante los años setenta y ochenta, los indígenas llevaron a cabo recuperaciones de hecho de las tierras que habían perdido y así mismo mostraron interés en negociar sus pleitos por éstas, pero no obtuvieron el reconocimiento de ningún resguardo<sup>17</sup>. Es a partir de 1991 que el movimiento liderado por el Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, toma más fuerza y busca soluciones legales a sus peticiones. En 1997, obtienen el reconocimiento de algunos resguardos en los municipios de Belalcázar y Risaralda, en el *Bajo Occidente*, sobre los que no se profundiza, y en 2000 obtienen el reconocimiento del resguardo de San Lorenzo, en Riosucio.

En Riosucio y Supía, la violencia es intensa entre 1998 y 2004. Si bien es cierto que este proceso responde a las disputas entre autodefensas y guerrilla, no se puede llegar al extremo de afirmar que esta violencia se separó de las luchas indígenas. Por el contrario, las luchas indígenas por los resguardos y otras reivindicaciones relacionadas con la supervivencia cultural y con su participación en el escenario político, hacen también parte de la violencia reciente. Al respecto es bueno anotar que, además de las movilizaciones por la tierra y los

16 Sobreviven de esta manera en Caldas unos asentamientos coloniales, donde conviven muy variados grupos sociales, entre los que se destacan indígenas Chami, Katio y otros grupos de origen muy complejo así como campesinos no indígenas, muchos de estos últimos con ascendencia indígena.

17 Se debe tener en cuenta que durante buena parte del siglo XX ha tenido especial incidencia el movimiento indígena que se creó en el departamento del Cauca a partir del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, a través del cual se recuperaron muchas tierras. Inicialmente, estas luchas tuvieron un impulso a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, en los años sesenta, pero posteriormente nació el Consejo Regional Indígena del Occidente Colombiano, Cridoc, que albergaba las comunidades de Caldas, Risaralda y el resguardo de Cristianía, en Antioquia. En 1985, el Consejo Regional Indígena de Risaralda, Crider, se separó del Cridoc, mientras que en Caldas nació el Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec. En los años 1980 y 1990, el movimiento indígena registró diferentes dinámicas. Por un lado, logró el reconocimiento de los resguardos en Risaralda en 1986 después de varios años de luchas. En Caldas, se presentaron reconocimientos de resguardos a partir de 1997 y hasta el presente. Adicionalmente, a raíz de la Constitución de 1991, los indígenas han encontrado espacios para solucionar múltiples reivindicaciones relacionadas con la recuperación de sus tierras. El caso de Caldas es particular, pues los indígenas, a través de sus organizaciones, han presionado por medios legales para que les sean devueltas las tierras ubicadas en los resguardos que aparecen como propiedad de otros. Así, el Incora ha tenido que mediar, comprándoles a aquellos que la poseen para poderse las asignar a los resguardos indígenas recién constituidos.

resguardos, los indígenas de Caldas, especialmente los de Riosucio, pasaron a la escena política con el propósito de ganar la Alcaldía. El primer candidato que se lanzó en 1988 fue José Gilberto Motato, sin embargo poco después fue asesinado, situación que afectó notablemente el movimiento indígena. En 1991, estimulados por la nueva Constitución, los indígenas buscaron puestos en los concejos municipales. Más adelante, se presentó otra candidata a la Alcaldía, Fabiola Largo, pero no lo consiguió. Con ocasión de la última elección de alcaldes, en 2003, fue lanzado Gabriel Cartagena, no obstante también fue asesinado, al igual que Fabiola Largo. Finalmente, en octubre de 2003, fue elegido Darío Edgardo Tapasco, no obstante las presiones y las amenazas continúan.



Fuente: Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República

Las tasas de homicidios presentan una tendencia ascendente en Riosucio entre 1999 y 2001, pero mantienen niveles elevados hasta 2004; en Supía, ocurre algo similar, sin embargo con oscilaciones diferentes, suben entre 1998 y 2000, entre 2001 y 2002 y se mantienen elevadas en 2003 y 2004, no obstante su descenso. En 2000, en Riosucio, un grupo de integrantes del bloque Central Bolívar hizo presencia en los resguardos indígenas, interrogando a los habitantes de varias veredas y pintando *grafittis*, tratando de golpear supuestos apoyos de la guerrilla y según las crónicas reclutando jóvenes.

Si bien lo anterior tiene una dinámica propia que parte de las organizaciones armadas, al mismo tiempo tuvo relación con el fortalecimiento del Cridec, cuyos integrantes eran vistos como apoyos de la guerrilla. Los homicidios de impacto, que recayeron en las autoridades tradicionales, no demoraron en producirse. El 24 de junio de 2001, integrantes de las autodefensas llegaron en la mañana al resguardo Cañamomo y Lomapieta, donde asesinaron a 5 indígenas, 4 de los cuáles fueron torturados; en estos hechos, fue

asesinado el ex-gobernador del resguardo y uno de los fundadores de la Onic, Luis Ángel Chaurra. Así mismo dieron muerte a Augusto Uchima, Napoleón Uchima, Víctor Manuel Asprilla y Luis Fernando Ladino y se llevaron a dos jóvenes mujeres indígenas, Juveni Chaurra Uchima y Fanny Chaurra Uchima, hijas del ex-gobernador asesinado. Como consecuencia de lo anterior, aproximadamente 500 indígenas y campesinos se desplazaron<sup>18</sup>. El mismo día, en la reserva Escopetera Pirza del mismo municipio, las autodefensas ultimaron a Alvaro Motota y Leonardo Díaz, de la comunidad Embera Chamí. El 24 de noviembre de 2001, en la comunidad de Bajo Pirza, en el municipio de Riosucio, el mismo grupo asesinó a Luis Eduardo Díaz Becerra, ex-cabildante de la Parcialidad y torturaron a Camilo y Carlos Alberto García<sup>19</sup>. Se conoció igualmente que el 13 de diciembre de 2001, resultaron muertos Luis y Leonardo Caisales. Hay que poner de presente, adicionalmente, la ocurrencia de enfrentamientos entre autodefensas y guerrilla, que sumado a la escalada de homicidios, ocasionó el desplazamiento de la población desde los municipios de Riosucio y Supía y particularmente desde el resguardo de Cañamomo y Lomapieta, hacia el casco urbano de Riosucio. Se movilizaron alrededor de 78 familias que representaron unas 390 personas<sup>20</sup>.

La situación de los indígenas en 2001 se volvió tan preocupante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Gobierno colombiano la adopción de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de 40 líderes indígenas "pertenecientes a las comunidades Embera Chamí que habitaban en los resguardos y asentamientos de Cañamomo y Lomapieta, San Lorenzo, Nuestra Señora de la Montaña, Escopetera Pirza, Yarumal, La Toma, La Albania, Cerro Tacón, La Soledad así como de los miembros del Cridec en los departamentos de Caldas y Risaralda"<sup>21</sup>.

Es obvio sin embargo que en buena medida la violencia es independiente de las luchas indígenas y responde más a las actuaciones de autodefensas y guerrilla en el marco de su disputa por el dominio territorial. No obstante, las medidas cautelares también apuntan a darle protección al movimiento indígena y tratar de brindarles garantías para que desempeñen su actividad política. Adicionalmente, en septiembre de 2001 las comunidades indígenas publicaron un comunicado en el que se expresaron contra los actores armados y por la reivindicación de su cultura, lo que refleja el clima de violencia que se vivía y la postura de los indígenas frente a este proceso. En concreto, reivindicaron su autonomía, se pronunciaron contra los grupos armados irregulares, contra el despojo de tierras, reivindicaron sus autoridades, condenaron la violencia y se declararon por fuera de la confrontación entre las agrupaciones armadas. Señalaron que "nuestros territorios no deben convertirse en refugio para personas armadas, de ninguna en particular y no pueden ser escondite de quienes quieren eliminar nuestras vidas"<sup>22</sup>.

En 2002, la cadena de homicidios continuó en Riosucio y si bien responde en buena medida a la confrontación entre autodefensas y guerrilla, no hay dudas acerca de la confluencia, al mismo tiempo, de factores locales. Los homicidios fueron cometidos en un lapso muy corto por las autodefensas, afectando a las autoridades tradicionales

18 Cinep & Justicia y Paz. Revista Noche y Niebla N° 22, p 106.

19 Archivos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Área de Atención y Prevención.

20 Ver Presidencia de la República, Unidad Territorial de Caldas. Desplazamiento Masivo Resguardo Cañamomo y Lomapieta y Escopetera Pirza del municipio de Riosucio hacia la cabecera municipal de Riosucio y Supía. Manizales, 29 de julio de 2001. Ver también Departamento de Policía de Caldas. Informe sobre desplazados. Riosucio, mimeo, 29 de noviembre de 2001.

21 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicitud de medidas cautelares para los resguardos y asentamientos Embera Chamí en Caldas y Risaralda.

22 Ver "Posición del pueblo Embera Chamí del departamento de Caldas frente al conflicto armado en nuestros territorios" Riosucio, Septiembre de 2001. Publicado en: ONIC. Pronunciamientos de las organizaciones y Pueblos Indígenas frente a los actores armados, los conflictos bélicos en su territorio, respeto a sus leyes y la Búsqueda de la Paz. Bogotá, Ediciones Turdakke, 2002.



Vehículo de transporte tipo Escalera (Chiva). Manzanera, Caldas

indígenas y en especial a candidatos a la alcaldía. El 10 de marzo, en horas de la noche, fueron asesinados los esposos indígenas William Tapasco Largo y Celina Largo Castaño, pertenecientes a la comunidad de Planadas del resguardo Cañamomo Lomaprieta. Diez días después, en el mismo resguardo, en la comunidad de Panesso, fue sacado de su residencia y posteriormente asesinado el joven indígena Jhon Jair Hernandez Cataño<sup>23</sup>. Dos días después, en la parcialidad de Escopetera Pirza, fue muerto Alvaro Reyes Uchima. El 9 de abril, en el resguardo Cañamomo y Lomaprieta, en jurisdicción de Riosucio, en la escuela de la comunidad de Sipirra, fue ultimada la dirigente indígena y ex-gobernadora del Resguardo de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña y ex-candidata a la alcaldía de Riosucio, Fabiola Largo Cano, que con anterioridad había denunciado amenazas contra su vida y estaba protegida con medidas cautelares<sup>24</sup>. El 16 de abril, miembros de un grupo armado no identificado irrumpieron en un sitio de diversión del resguardo Cañamomo Lomaprieta y asesinaron a Horacio de Jesús Trejos<sup>25</sup>. Días después, el 27 de abril, fueron ultimados Duván González y Elmer Reyes, ambos de la parcialidad Escopetera Pirsa. El día siguiente, fueron asesinados Danilo Romero y Luis Carlos González pertenecientes a Cañamomo Lomaprieta. A lo anterior, se suma que por esos días fueron amenazados importantes líderes indígenas tales como Gabriel Angel Cartagena, Oscar Anibal Largo y Hernando Hernández<sup>26</sup>. Como consecuencia de esta situación, se produjo nuevamente un pronunciamiento respecto de Riosucio en el marco de la llamada "Macrorregional" de occidente organizada por la Onic, en el que protestaron contra las muertes de sus dirigentes

23 Cinep & Justicia y Paz. Revista Noche y Niebla N° 23.

24 Ver Archivos del Programa Presidencial de Derechos Humanos. Igualmente se puede consultar la revista Noche y Niebla No. 24 del Cinep.

25 Cinep & Justicia y Paz. Revista Noche y Niebla N° 24, p 51.

26 Ver Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos. Informe sobre la violación a los Derechos Humanos en el eje cafetero. Bogotá, Mimeo, Mayo 23 de 2002, pág 32.

y repasaron sus reivindicaciones culturales y su postura contraria a los actores armados<sup>27</sup>.

Paralelamente a lo ocurrido en Riosucio, las autodefensas actuaron en Supía. En la comunidad del Bajo Sevilla, el 23 de febrero, en horas de la noche, fueron asesinados los indígenas Aicardo Antonio Ayala Ayala y Milton Ayala Andica. El 16 de marzo, en horas de la mañana fue ultimado el indígena Aristides Vélez en hechos ocurridos en la comunidad El Brasil. El 6 de septiembre, en la vía a La Felisa, desconocidos asesinaron con arma de fuego a Juan De La Cruz Jaramillo Lasso. Se produjeron como consecuencia de lo ocurrido en Riosucio y Supía desplazamientos de población y protestas. Es importante señalar, adicionalmente, que en el mes de junio de 2002, se llevó a cabo una "marcha por la paz y contra la violencia," organizada por el resguardo de Cañamomo y Lomapieta, en jurisdicción de Supía y Riosucio<sup>28</sup>.

En 2003, en enero, las autodefensas desaparecieron a un indígena y asesinaron a otro. En el mes de marzo, la Onic denunció el asesinato de cinco personas más en un solo hecho a manos de la misma agrupación. En marzo, se produjo otro más: el Cabildo Indígena de Cañamomo Lomapieta con sede en Riosucio y Supía, Caldas, denunció públicamente que José Efraín Ramírez había desaparecido desde el 28 de marzo de este año, cuando se dirigía de Riosucio a su comunidad en Supía, donde residía con su esposa e hijos, transportándose en una moto de su propiedad. Al final, su cadáver fue encontrado en La Pintada, Antioquia. En el mes de junio, 3 indígenas más fueron heridos en un hecho y ocurrió una masacre, presuntamente por las autodefensas, que arrojó 4 víctimas mortales y 4 heridos. Las víctimas se dirigían al resguardo de San Lorenzo a hacer campaña política, entre los fallecidos se encontraba Gabriel Angel Cartagena, ex-gobernador indígena y aspirante a la Alcaldía de Riosucio, previamente amenazado. Además de Cartagena, se encontraban Fabio Tapasco, Hugo Tapasco y Diego Suárez<sup>29</sup>. Durante el mismo mes, en el municipio de Supía, en zona rural del corregimiento La Felisa, integrantes de las autodefensas asesinaron a los hermanos John Jairo y Robert William Izquierdo Salazar, pertenecientes a la comunidad indígena Cerro Tacón de Supía.

La violencia en Riosucio y Supía cede a partir de 2004. La tasa de homicidio pasó en Riosucio de 84 hpch en 2003 a 72 en 2004 y a 36 en 2005. En Supía pasó de 143 a 84 y a 59 en los mismos años. La intensidad de la confrontación en el conjunto del *Alto Occidente* pasó de 18 acciones, a 6 y 3 respectivamente. Según las entrevistas, sobre lo anterior incidió la constitución del *Comité Interinstitucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana*, el fortalecimiento de la Fuerza Pública, el repliegue de las Farc y la disminución de las presiones de las autodefensas. En dicho Comité, participaron el movimiento indígena, autoridades indígenas, la Alcaldía, la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la Personería, autoridades departamentales, la Defensoría del Pueblo y eventualmente representantes de autoridades nacionales; este esquema ayudó a disminuir la tensión, impulsando una mejor comunicación entre las autoridades civiles, militares y policiales, y entre los niveles local, departamental y nacional; en este marco, se adoptaron posturas preventivas. Lo anterior se vio favorecido por un incremento

27 Ver "Manifiesto Indígena de Riosucio, Caldas, 16 de abril de 2002". En: Onic, Op. Cit., pág 41.

28 Ver Policía Nacional, Departamento de Caldas. Informe de Situación. Manizales, mimeo, 12 de julio de 2002.

29 El Tiempo. Asesinan a cuatro emberas en Caldas. Junio 10 de 2003.

de la presencia de la Policía, particularmente en la cabecera y en los corregimientos de Bonafont y San Lorenzo, a lo que hay que sumar la existencia de soldados campesinos y una actitud más decidida de las Fuerzas Militares, y particularmente del batallón Ayacucho, pues los combates planteados por ellos subieron de diez entre 2000 y 2002, a trece en 2003. Las Farc, ante la nueva situación, se replegó, al tiempo que dejó de movilizar grandes contingentes; si bien a juicio de un entrevistado mantiene bases en la subregión, éstas están más arriba, en la montaña. Las autodefensas disminuyeron ostensiblemente los homicidios, aunque mantenían presencia a partir de redes de inteligencia.

Riosucio, no sólo ha sido afectado por los homicidios, sino también por el desplazamiento forzado, que ha estado directamente relacionado con la crítica situación de los indígenas entre 1999 y 2003, como se anotó anteriormente, en especial en 2001 y 2002, cuando se desplazaron más de 2.200 personas, la mayoría indígenas. Sólo en 2001, se presentaron tres desplazamientos masivos en junio, noviembre y diciembre, producto de la presión por parte de los miembros del frente Cacique Pipintá del bloque Central Bolívar de las AUC, que buscaban ejercer dominio sobre la población.

El caso de Marmato difiere del de Riosucio, sin embargo tiene algunas similitudes con Supia, debido al alto porcentaje de población afrocolombiana en el municipio, así como la presencia de minas de oro, fuente principal de recursos para la población. En la década de los noventa, Marmato registró tasas de homicidios por encima del promedio de tasas de la región *Occidente*, comportamiento relacionado con la presencia de las Farc que han usado este municipio como corredor estratégico para llegar al suroriente antioqueño y para atravesar el departamento de Caldas.

La tasa de homicidios en Marmato, al igual que en Supia empieza a aumentar a partir de 1999, sin embargo no alcanza los niveles de este último municipio. En 1999, presentó una tasa de homicidio por cada cien mil habitantes de 113, para el año siguiente disminuyó a 89 y para 2001 de nuevo aumenta a 110, fruto de la llegada del frente Cacique Pipintá del bloque Central Bolívar, que entró a disputarle a la guerrilla su fuente de recursos; según el SAT, dicha entrada “coincidió con la adjudicación de la licitación aurífera más grande de Caldas otorgada a la empresa Mineros de Colombia”<sup>30</sup>.

Entre 2002 y 2003, la tasa de homicidios disminuye a 43 hpch, al igual que en Riosucio y Supia. Sin embargo, mientras que estos dos municipios mantienen un comportamiento a la baja entre 2004 y 2005, en Marmato suben nuevamente las tasas de homicidios hasta alcanzar 136 en 2005, la más alta en los últimos 11 años. Este recrudecimiento de la violencia en el municipio está relacionado directamente con el tema de las regalías que éste recibe como producto de la explotación aurífera, lo cual le permite tener ingresos superiores al promedio del departamento, siendo muy atractivo, tanto para las Farc como para las autodefensas, captar este tipo de recursos a través de medios coercitivos, extorsiones y presiones. Adicionalmente, en dicho municipio tiene fuerte presencia el frente Cacique Pipintá de las autodefensas, que hasta el presente no se ha desmovilizado, por lo que se mantiene latente la disputa territorial entre este grupo y las Farc.

30 Informe de Riesgo No. 010. Sistema de Alertas de Tempranas. Defensoría del Pueblo.



## El Bajo Occidente o Suroccidente

Los municipios de Anserma, Risaralda, Viterbo y Belalcázar están muy asociados a la problemática del departamento de Risaralda, porque el conjunto de esta subregión limita con éste; en esta medida, están también muy influenciados por el norte del Valle. El rasgo principal de la subregión es la presencia del narcotráfico a través de pequeños “capos”, situación que ha determinado la formación de sectores políticos emergentes que han remplazado la élite tradicional en lo relacionado con el control del poder local, lo que ha repercutido en altos niveles de violencia. Se debe tener en cuenta que en estos municipios ha existido una violenta disputa política entre partidos tradicionales desde la época de la Violencia, situación que aprovecharon estos nuevos grupos que han accedido al poder, usando la violencia y la intimidación. Así mismo, se asienta el frente Cacique Pipintá del BCB, principalmente contra el río Cauca, pero al mismo tiempo el frente Héroes de Guática de las autodefensas tiene incidencia, sobre todo en límites con Risaralda; estas agrupaciones funcionan a través de redes delincuenciales y de sicarios al servicio del narcotráfico. Por otro lado, la presencia de la guerrilla, a través del frente Aurelio Rodríguez y la disidencia del EPL es menos nítida que en otras regiones del departamento, puesto que se circunscribe al municipio de Anserma.



Fuente: Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República

El tema del narcotráfico y su incidencia en la violencia se expresa en las muy elevadas tasas de homicidio, que son significativas en todos los municipios, especialmente en Viterbo y Belalcázar. En Viterbo, las tasas bajaron de 212 hpch en 1990 a 58 en 1994, pero a partir de ese año, aumentan y llegan a su pico en 1998, cuando registró 206; desde ese entonces disminuyen, registrando oscilaciones, pero se ubican muy por encima de los 100 hpch, salvo en 2003 y 2005 cuando registraron 90 y 98 respectivamente. La



Transporte de carga y pasajeros. Manizales, Caldas

problemática de este municipio es la presencia de un narcotraficante apodado “Patemuro”, que tiene tradición y arraigo, y que no ha podido ser capturado; situación que explica que ahí funcione un engranaje sicarial de proporciones importantes, similares a los de ciertas poblaciones de Risaralda y del norte del Valle; en Viterbo, no existen cultivos ilícitos, pero sí laboratorios en donde se procesa la coca traída de otros lados.

En el municipio de Risaralda confluyen así mismo viejas disputas políticas y el posicionamiento de grupos emergentes en la política local. Entre 1990 y 1999, las tasas siempre estuvieron entre 100 y 200 hpch, período que coincide con una serie de homicidios contra representantes del poder local<sup>31</sup>. En el nuevo milenio, las tasas se mermaron, oscilando entre los 80 y 90 hpch, salvo en 2005 cuando llegaron a 62. En Belalcázar, el contexto es similar. En estos dos municipios, se desenvuelven pequeños narcotraficantes que han vuelto al municipio con más recursos. De tal manera que algunos homicidios tienen alguna connotación política, pero en su mayoría son asuntos relacionados con ajustes de cuentas entre narcotraficantes y organizaciones delincuenciales. El municipio registró desde 1990 tasas que siempre superaron los 100 hpch, un índice muy elevado, con excepción de 1995, 1996 y 2004 cuando registraron 99, 98 y 64 hpch respectivamente.

31 De acuerdo con la base de datos consultada, en la segunda mitad de la década de los ochenta se habían producido asesinatos que recayeron en representantes de la clase política local. En mayo de 1991, fue asesinado por desconocidos el dirigente conservador del municipio de Risaralda, Caldas, ex-auditor de las empresas públicas de Manizales y Coordinador del servicio de salud de Caldas, Silvio Castaño Grajales; en septiembre de 1997, fue muerto un concejal; en enero de 2003, desconocidos asesinaron con arma de fuego al concejal José Duván Cardona, de filiación política Liberal.

El caso de Anserma es diferente. El peso del narcotráfico es determinante, porque es un punto muy importante en la carretera Cali – Pereira – Medellín, un corredor para las organizaciones que están inmersas en este negocio ilícito, además de ser un municipio muy dinámico a nivel comercial. En este contexto, los homicidios tienen un peso muy importante. A partir de 2000, superan la barrera de los 100 hpch, en 2003 llegan a 168 y bajan a 101 en 2005. Adicionalmente, la guerrilla tiene un peso significativo en este municipio, concentrándose el 80% de sus acciones armadas. Teniendo en cuenta los ataques registrados desde 2000, se tiene que la guerrilla cometió trece atentados a bienes civiles, en su gran mayoría carros incendiados, destruyeron un puente sobre el río Cauca en la vía a Neira y afectaron 4 torres; se presentaron así mismo cuatro emboscadas contra el Ejército, todas ocurridas entre 2003 y 2006 y otra contra la Policía en 2004, realizadas principalmente por el frente Aurelio Rodríguez de las Farc.

De acuerdo con Fondelibertad, entre 1996 y 2005, el EPL ha sido el responsable de 20% de los secuestros en la zona *Occidente*, en donde tradicionalmente ha tenido presencia el frente Oscar William Calvo, al mando de alias “Leyton”, quien murió en combate con el Ejército, en julio de 2006. Este frente tiene su centro principal en el municipio de Quinchía, en el departamento de Risaralda, y desde ahí incide en Anserma, así como en Riosucio, este último ubicado en el *Alto Occidente*. Se trata de un pequeño reducto que tiene un perfil militar muy incipiente y centra su accionar en cometer extorsiones y secuestros. Su principal problema radica precisamente en su debilidad. En la medida en que no tiene un radio de acción significativo, prefiere con frecuencia dar muerte a sus víctimas para evitar ser sorprendidos por las autoridades. En septiembre de 1999, esta agrupación secuestró y después asesinó a Ana Cecilia Hoyos, propietaria de la firma Coralpa; en julio del mismo año, hizo lo propio con Gabriel Fernando Gutiérrez, un odontólogo que laboraba en el hospital San Juan de Dios; en junio de 2000, después de secuestrarlo, asesinó a Fernando Betancourt, accionista de las firmas Apuestas Sortear Apoistar Ltda; en marzo de 2001, plagió y luego dio muerte a Aida Botero de Duvalier; en junio de 2001, fue asesinada Cristina Echeverri, sobrina del Gerente Administrativo de la Federación Nacional de Cafeteros, Emilio Echeverri Mejía; en marzo de 2003, se registró el caso de Evangelista Jiménez, Coordinador del Comité de Cafeteros de Anserma; en noviembre, secuestró a Julio Fernando Buitrago, técnico de una empresa contratista de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC. Más recientemente, en abril de 2006, en Quinchía, Risaralda, este frente plagió a Juan Carlos Lizcano, hijo del ex-congresista Oscar Lizcano, a su turno secuestrado hace varios años por las Farc, situación que generó zozobra y temor entre sus familiares, teniendo en cuenta los antecedentes de esta agrupación. Sin embargo, gracias a la presión de la Fuerza Pública y a una crisis interna del grupo, se logró su liberación, el 23 de julio de 2006.

Durante el mes de julio de 2006, se registraron varios hechos que incidieron en la desarticulación del frente Oscar William Calvo. El primero, como se dijo anteriormente fue la muerte en combate de alias “Leyton” durante un choque armado con tropas del Batallón San

Mateo del Ejército en Quinchía (Risaralda), el 8 de julio de 2006, la captura por parte de las autoridades de alias “Leo”, posible sucesor de “Leyton”, mientras tenía en su poder una suma de dinero importante, lo cual afectó las finanzas del grupo y la desmovilización de siete de sus integrantes, el 23 de julio, lo que de acuerdo con las autoridades sólo les deja cerca de 10 guerrilleros en sus filas.

## Centro Sur

Esta subregión es en grandes líneas la continuación de la región *Norte* y en esa medida el frente Cacique Pipintá hace presencia en el margen derecha del río Cauca en los municipios de Neira, Palestina, Manizales y Chinchiná, que se constituye en un corredor de movilidad para el narcotráfico; esta agrupación igualmente tiene incidencia en el casco urbano de la capital. La presencia del frente 47 de las Farc es más limitada, pues como se dijo anteriormente su peso se concentra más en el *Oriente*, sin embargo existen algunas manifestaciones de milicias bolivarianas en Manizales. El ELN tiene alguna presencia en las zonas rurales de Villamaría, Manizales y Neira, a través del frente Bolcheviques del Líbano, como prolongación de su accionar desde el norte del Tolima. En la década de los noventa, la confrontación se intensifica entre 1994 y 1998, no obstante después vuelve a niveles más bajos. En 2005, se presenta un aumento, principalmente por la mayor iniciativa en cuanto a combates planteados por las Fuerzas Militares en Manizales, Neira y Villamaría, cinco de ellos contra el frente Bolcheviques del Líbano en zona rural de esos municipios.



Manzanares, Caldas



Fuente: Boletines diarios del Das, Policía Nacional y Fondelibertad  
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la República  
 Eje izquierdo: Tasas de homicidio  
 Eje derecho: Secuestro e intensidad de la confrontación

Un aspecto sobresaliente son las elevadas tasas de homicidio en Chinchiná y Palestina, municipios que empujan el nivel del conjunto de la subregión hacia arriba. Los dos municipios tienen características similares, no obstante se profundiza sobre Chinchiná, puesto que es donde más se evidencia el alza. En Chinchiná, entre 1990 y 2006, la tasa se ha ubicado por encima de los 100 hpch, siendo su pico en 2000 con 194. El municipio combina muchos factores que explican estos altos niveles. Por un lado, es un municipio con una importante actividad cafetera y mantiene la tradición de una afluencia de población flotante en las épocas de cosecha, lo cual incide en que los conflictos entre recolectores se manifiesten violentamente y aumenten los homicidios; así mismo, la prostitución es una característica que se evidencia desde años atrás. Adicionalmente, el municipio creció como consecuencia de la avalancha de Armero, lo que contribuyó a la formación de barrios marginales que han vuelto la situación más inestable. Está muy influenciado por Pereira, el departamento de Risaralda y el norte del Valle, y en esa medida es un bastión del narcotráfico, donde se originaron estructuras delincuenciales y criminales.

Por otra parte, en Chinchiná, en los años noventa, existieron bandas vinculadas a la delincuencia organizada, entre ellas la denominada "*los sepultureros*", que se han reproducido de generación en generación, por lo que en el presente sobreviven dinamizadas por el narcotráfico. En particular, existe un sicariato importante contratado en otras partes del país. El narcotráfico no se expresa a través de grandes capos, sino a través de una constelación de pequeños narcotraficantes que dificulta su desmantelamiento. Existe alguna expresión de la guerrilla, a través de milicias urbanas, sin embargo ésta guarda un muy bajo perfil. Se insinúa la presencia del frente Cacique Pipintá, sin embargo se desdibuja en la medida en que el mayor peso de los homicidios reposa en las bandas criminales y sicarios. Situación particular es la de

Villamaría. Es un municipio de gran extensión, cuya cabecera queda muy cerca de Manizales. El frente Cacique Pipintá tiene un corredor desde Chinchiná hasta ahí, donde accede a zonas de producción de cebolla, en las que obligan a los finqueros a pagar una cuota “por seguridad” y controlan el suministro de la cebolla a Manizales.



Fuente: Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
Vicepresidencia de la República

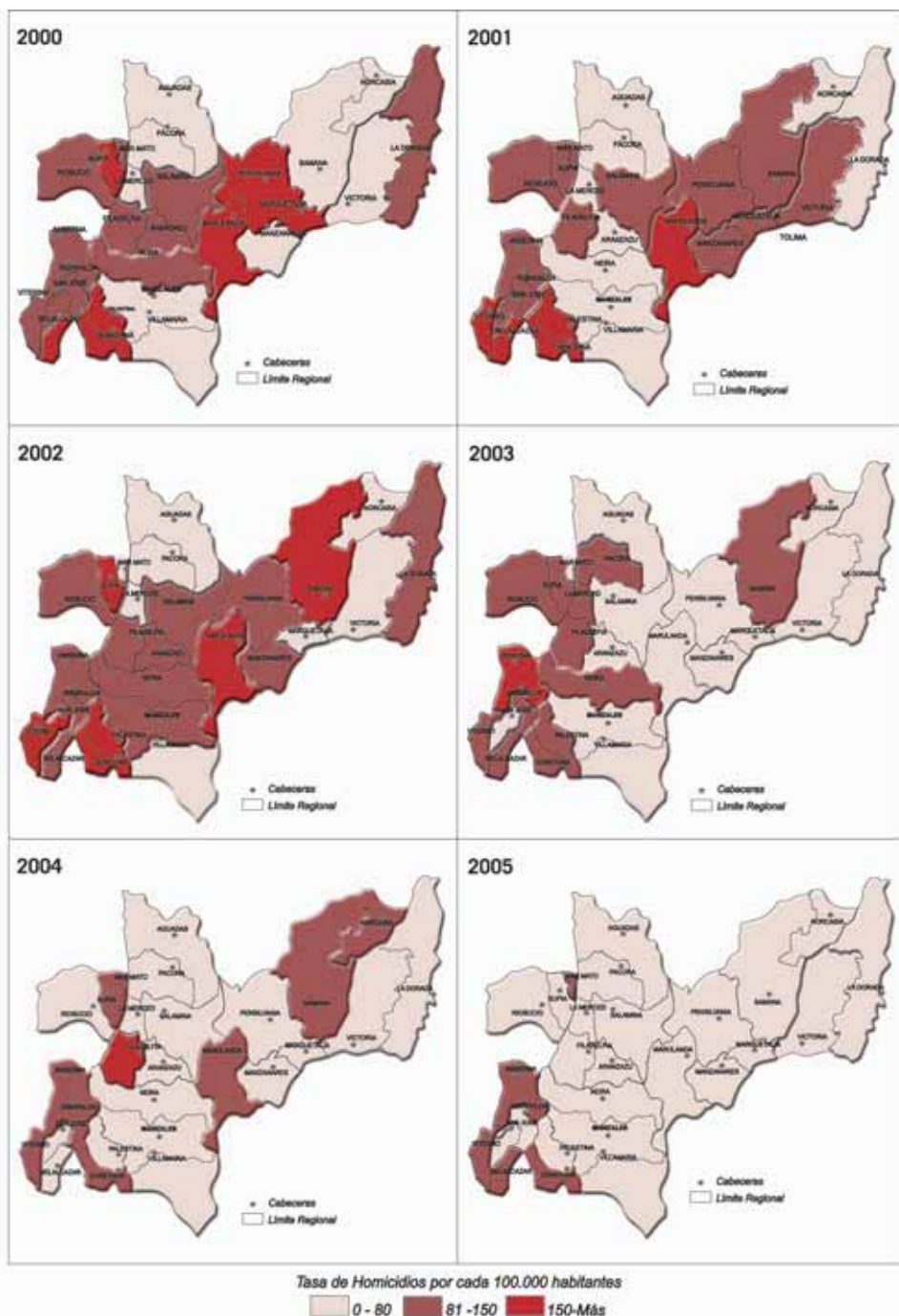
En Manizales, se expresan dinámicas de otras regiones del departamento. En las zonas rurales, hasta los límites con municipios vecinos, se registra la presencia de autodefensas del frente Cacique Pipintá, donde hacen patrullajes, presionan a mayordomos y extorsionan a los conductores de camperos que transportan los productos de la región. Inciden en la cadena de la comercialización de la cebolla, proceso mediante el cual cobran una cuota por su transporte desde Villamaría y por su distribución a través de la galería de mercado de la capital del departamento. En la galería, también extorsionan a comerciantes y a transportadores y suelen atracar a las busetas que no cumplen con la cuota. En los barrios populares, llevan a cabo reclutamiento y acciones de *limpieza social*, que recaen en integrantes de pequeñas estructuras delincuenciales. Esporádicamente, han aparecido afiches en los que expresan que “los niños buenos se acuestan a las ocho y a los otros los acostamos nosotros”. Han actuado en algunos barrios de la Comuna cinco, especialmente en Solferino, Comunero, y San Cayetano. Hacen presencia del mismo modo en el centro de la ciudad y especialmente en el entorno de la galería de mercado.

En Manizales, se han producido homicidios de impacto en los que se han utilizado sicarios provenientes de otras zonas del país y especialmente de Medellín. Es el caso del asesinato del Director de La Patria, Orlando Sierra, ocurrido el 1 de febrero de 2002 y del congresista Oscar González, asociada a la dinámica que se desarrolla en el norte del departamento.



Manizales, Caldas

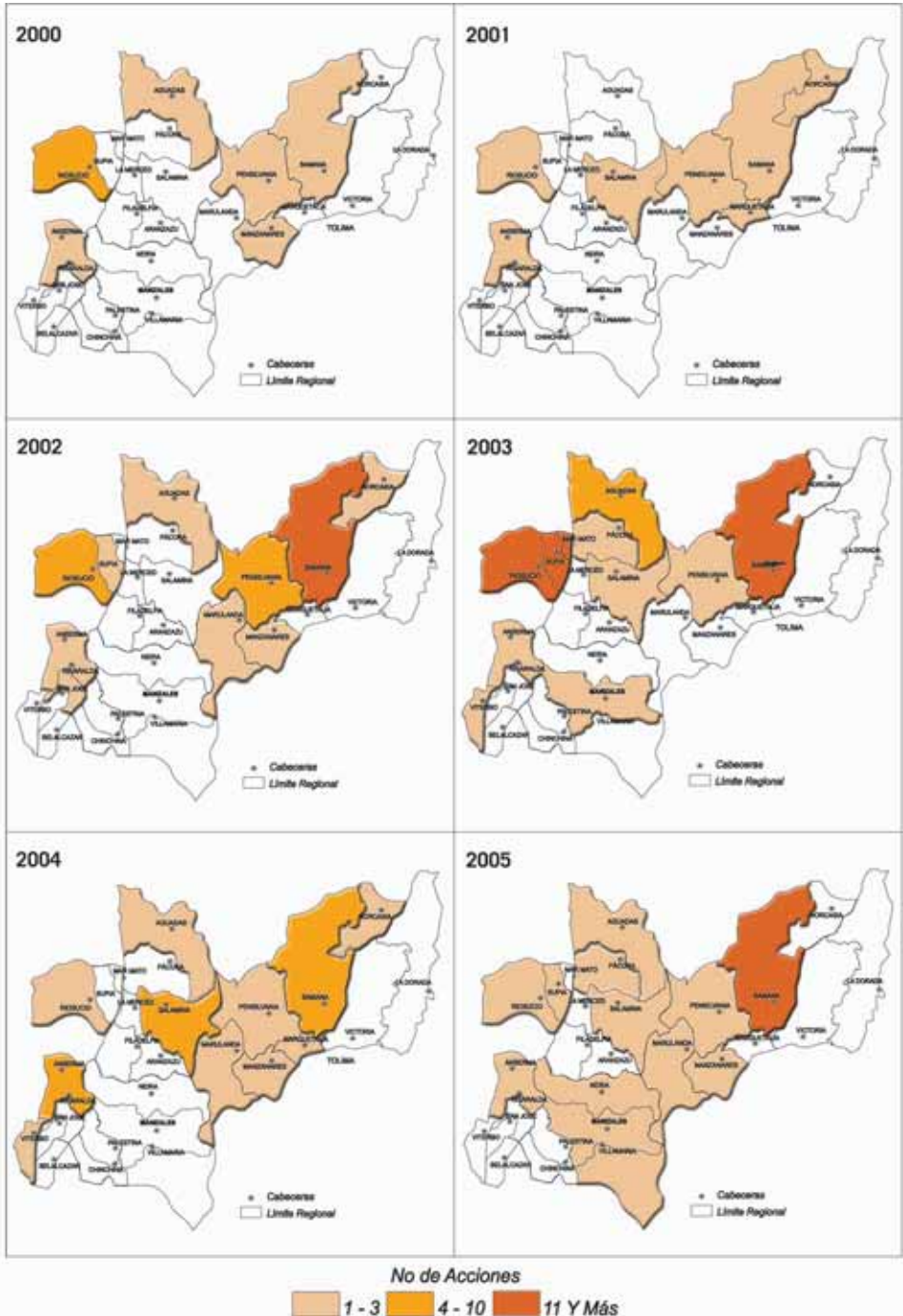
## Tasas de homicidio en Caldas



Fuente base cartográfica: IGAC  
 Fuente: Policía Nacional  
 Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la República

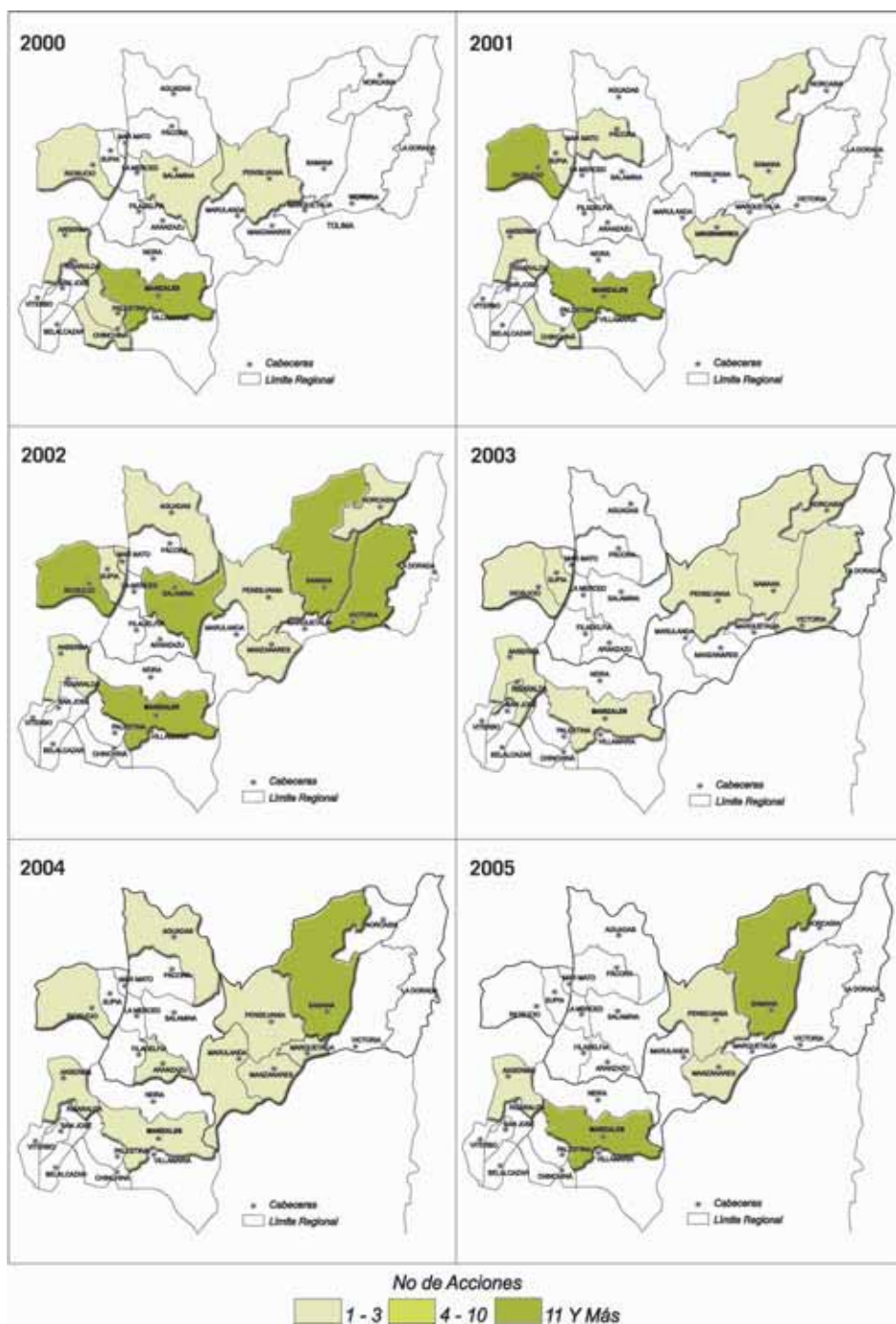


## Contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública en Caldas



fUENTE BASE CARTOGRAFICA: IGAC  
 FUENTE: Boletines diarios del Das  
 PROCESADO Y GEORREFERENCIADO POR EL OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DH Y DIH  
 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

## Acciones armadas de los grupos irregulares en Caldas



Fuente base cartográfica: IGAC  
 Fuente: Boletines diarios del Das  
 Procesado y georeferenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la República

# Conclusión

La consolidación de las Farc en el departamento a finales de los noventa y la incursión de las autodefensas en los años 2000 generaron un incremento en la intensidad de la confrontación armada, la tasa de homicidio y el número de secuestros entre 1998 y 2002 y en general de los diferentes indicadores de la violencia. Se debe resaltar que las tasas de homicidio han sido elevadas desde principios de los noventa, década a partir de la cual se realiza este estudio, por factores asociados al narcotráfico.

La intensidad de la confrontación armada no fue muy significativa en la década de los noventa, sin embargo crece a principios de los años 2000 por la expansión de las Farc en el oriente del departamento, por la ruptura de la zona de distensión en 2002 y el incremento de los combates planteados por la Fuerza Pública, principalmente a raíz del desarrollo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Lo anterior se expresó con mayor intensidad en el *Oriente* y particularmente en Samaná y Pensilvania, y en menor medida en el *Occidente*, en el municipio de Riosucio.



Plaza de Bolívar. Samaná, Caldas

Las acciones que la guerrilla desplegó con mayor intensidad fueron ataques a bienes civiles, entre los cuales se destacan los atentados contra la infraestructura. Los ataques a la Fuerza Pública han sido leves en líneas generales y esporádicamente se han presentado ataques a poblaciones, tales como en los corregimientos de Arboleda y Montebonito, en los municipios de Pensilvania y Marulanda, en 2000 y 2006, respectivamente. Igualmente han acudido a paros armados, coyunturalmente, como ocurrió recientemente en las últimas elecciones para el Congreso de la República, llevadas a cabo el 12 de marzo de 2006. El uso de minas antipersonal en el departamento sólo se registra a partir de los años 2000, en especial en la zona *Oriente*. En esta región, han aumentado paulatinamente el número de víctimas, en especial militares. Es una táctica adoptada por la guerrilla, en reacción a la mayor presencia de la Fuerza Pública, al incremento de los combates y para la protección de sus campamentos. Igualmente ha sido utilizada para proteger los cultivos ilícitos y dificultar su erradicación.

Las tasas de homicidio en el departamento tradicionalmente han sido muy elevadas, situación que se dinamizó por el narcotráfico en el *Occidente*, en el *Norte* y en parte del *Centro sur* (Chinchiná y Belalcázar). En los años 2000, cuando las Autodefensas del Magdalena Medio decidieron expandirse en la vertiente oriental de la cordillera central, los homicidios aumentaron en municipios como Samaná y Pensilvania. Igualmente en el mismo periodo, el frente Cacique Pipintá, muy influenciado por el narcotráfico, tuvo gran participación en el aumento de las tasas en la región *Norte*, y en el *Occidente*, en el municipio de Riosucio, donde viven comunidades indígenas organizadas en varios resguardos.

El secuestro no tiene tanto impacto como en otras regiones del país. Lo anterior se debe a que la guerrilla concentra principalmente su accionar en el *Oriente* y ha buscado financiarse a partir del narcotráfico. Así mismo, su capacidad para cometer plagios ha sido nimia en los municipios donde predomina la influencia de narcotraficantes y bandas delincuenciales. Durante el periodo analizado, se presentaron picos en los años 2000 y 2002 asociados principalmente con secuestros masivos, ocurridos en el *Alto Occidente*. En la actualidad, los niveles de secuestro son irrisorios, gracias a la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, que se ha expresado en una mejor seguridad vial y en una mayor presencia de la Fuerza Pública en los cascos urbanos.

Caldas no es uno de los departamentos más afectados por el fenómeno del desplazamiento. Sin embargo, proporcionalmente al tamaño de su territorio, - es uno de los departamentos más pequeños del país -, ha salido de manera forzada un número importante de personas (40.352 en ocho años). Se destaca la zona oriental, especialmente Samaná, donde los desplazamientos están asociados principalmente a disputas entre autodefensas y guerrilla y a tácticas utilizadas para evitar las fumigaciones. En menor medida, fueron importantes en Riosucio en 2001, coincidiendo con disputas entre estos grupos armados irregulares.

Finalmente, se debe destacar la crítica situación que vivieron las comunidades indígenas de los Resguardos San Lorenzo, Cañamomo Lomapieta, Escopetera Pirza y Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, en los municipios de Riosucio y en menor medida en Supía. Los homicidios se incrementaron entre 2000 y 2003 y afectaron a sus autoridades tradicionales. Lo anterior respondió a disputas entre guerrilla y autodefensas, así mismo involucró luchas por el poder local y en particular para neutralizar el movimiento indígena que se unificó y se enfrentó a los partidos tradicionales. Recientemente, la situación ha mejorado significativamente a raíz de la creación en 2002 del *Comité Interinstitucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana*, que armonizó las relaciones entre las autoridades civiles y militares y policiales, al tiempo que articuló los esfuerzos del municipio, departamento y de la Nación. También incidió en esta mejoría el incremento de la presencia de la Fuerza Pública, que replegó a la guerrilla hacia las zonas más montañosas y a la decisión de las autodefensas de bajar la presión sobre estas comunidades, muy probablemente a raíz del proceso de paz adelantado por el Gobierno con esta agrupación y de cara a una posible desmovilización.



# Anexo

## Indicadores por subregiones



Fuente: Policía Nacional  
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la República



Fuente: Boletines diarios del Das  
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la República



Fuente: Boletines diarios del Das  
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la Republica



Fuente: Fondellibertad  
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la Republica





Fuente: Consejería Presidencial para la Acción Social.  
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la República



Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal  
 Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH  
 Vicepresidencia de la República

